

# Boletín Jurisprudencial

Corte Constitucional del Ecuador



Con Independencia #Protegemos**Derechos**

## **Corte Constitucional del Ecuador**

Boletín jurisprudencial [recurso electrónico]: edición mensual / Corte Constitucional del Ecuador; Secretaría Técnica Jurisdiccional; Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. – (marzo. 2026). – Quito: Corte Constitucional del Ecuador, 2026.

70 pp.

**Periodicidad Mensual.**

**ISSN: 2697- 3502**

<https://www.corteconstitucional.gob.ec/boletines-jurisprudenciales/>

1. Jurisprudencia constitucional - Ecuador. 2. Garantías constitucionales. 3. Derecho procesal constitucional. I. Corte Constitucional del Ecuador. II. Título  
**CDD21:** 342.02648 **CDU:** 342.565.2(866) **LC:** KHK 2921 .C67 2021 **Cutter-Sanborn:** C827

**Catalogación en la fuente: Biblioteca “Luis Verdesoto Salgado”, Corte Constitucional del Ecuador**

Corte Constitucional del Ecuador

### **Jueces y juezas**

Jhoel Escudero Soliz (Presidente)

Karla Andrade Quevedo (Vicepresidenta)

Jorge Benavides Ordóñez

Alejandra Cárdenas Reyes

Sandra Cordero Gárate

Alí Lozada Prado

Richard Ortiz Ortiz

Claudia Salgado Levy

José Luis Terán Suárez

### **Autor**

Secretaría Técnica Jurisdiccional

### **Editor**

Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional

### **Diseño y Diagramación**

Dirección Nacional de Comunicación

Secretaría Técnica Jurisdiccional

Corte Constitucional del Ecuador

José Tamayo E10-25 y Lizardo García

(02) 3941800

Quito-Ecuador

<https://www.corteconstitucional.gob.ec/>

Corte Constitucional del Ecuador

Quito – Ecuador

**Septiembre 2026**



Presentamos la nueva versión de nuestro Boletín Jurisprudencial mensual, con una renovada propuesta de diagramación y una nueva forma de presentar las decisiones relevantes (novedades y destacadas). Estas mejoras buscan facilitar la lectura, hacer más accesible la información y ofrecer una experiencia de consulta más ágil e intuitiva.

Como parte de esta actualización, incorporamos también la insignia «**Protección de derechos**», que distinguirá las sentencias que tutelan directamente derechos sustantivos vinculados con la dignidad humana y la vida digna, con el fin de facilitar su identificación dentro del boletín.



### Decisión destacada

Es aquella de gran trascendencia nacional, que incluye decisiones de revisión, interpretaciones de normas relevantes, resoluciones de graves vulneraciones de derechos humanos y reconstrucción de precedentes. En estas decisiones se incorporan, en pie de página, las sentencias relacionadas que ayudaron a construir el precedente, o aquellas de las que la decisión destacada expresamente se aleja.



### Novedad jurisprudencial

Es la que inaugura un precedente o que marca un hito en la línea jurisprudencial. También, por regla general, incluye las decisiones con análisis de mérito y graves vulneraciones de derechos procesales.

## Sentencia de mérito



Es una decisión dictada en una acción extraordinaria de protección (EP), proveniente de una garantía jurisdiccional, que cumple con los presupuestos específicos delineados en las sentencias 176-14-EP/19 y 2137-21-EP/21<sup>1</sup>, para resolver los hechos y pretensiones que dieron lugar al conflicto de origen, además de revisar la actuación judicial del operador de justicia que dictó la decisión impugnada.

## Sentencias derivadas del proceso de selección y revisión



Las sentencias de selección y revisión surgen de la obligación de juezas y jueces de remitir a la Corte todas las decisiones ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales. La Corte, de forma discrecional y con base en los criterios del art. 25.4 de la LOGJCC (gravedad, novedad, negación o cambio de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional, y relevancia o trascendencia nacional), selecciona los casos que originan sentencias de revisión, las cuales estructuran el derecho constitucional ecuatoriano y se identifican con las siglas JP, JH, JD, JI y JC.

## Sentencia de reconstrucción de regla de precedente



En estas decisiones, la Corte verifica que las propiedades relevantes del caso son similares a precedentes establecidos con anterioridad y reconstruye la regla con la estructura “Si [supuesto de hecho], entonces [consecuencia jurídica]” (Sentencia 109-11-IS/20).

## Sentencia con declaratoria jurisdiccional previa



Se tratan de aquellas decisiones en las cuales la Corte Constitucional, luego de realizar una revisión exhaustiva del expediente y escuchar los fundamentos de las autoridades judiciales, observa que las y los jueces que conocieron las acciones de garantías jurisdiccionales en última instancia incurrieron en error inexcusable y/o manifiesta negligencia.

## Protección de derechos



Son decisiones emblemáticas de la Corte Constitucional orientadas a la protección y desarrollo de los derechos sustantivos reconocidos en la Constitución, cuya relevancia trasciende las cuestiones procesales del caso concreto. Estas sentencias desarrollan el contenido y el alcance de derechos relacionados como el buen vivir, las libertades, la igualdad, la participación, y la dignidad humana, entre otros, contribuyendo así a la consolidación de los estándares de protección constitucional.

<sup>1</sup> Los presupuestos necesarios para que la Corte Constitucional pueda dictar una sentencia de mérito son: i) que la autoridad judicial inferior haya violado el debido proceso u otros derechos en la decisión materia de la EP; ii) que los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una (ii.a) vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior, o (ii.b) situaciones en las que, prima facie, se observe una notoria desnaturalización de las garantías jurisdiccionales respecto de las cuales se deba corregir y emitir jurisprudencia vinculante; iii) que la Corte no haya seleccionado el caso para su revisión; y iv) que el caso indique alguno de los criterios de: gravedad, novedad, relevancia nacional o inobservancia de precedentes constitucionales.

# ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AME</b>        | Acción por Incumplimiento                                                     |
| <b>AN</b>         | Acción por Incumplimiento                                                     |
| <b>AP</b>         | Acción de Protección                                                          |
| <b>APG</b>        | Autoridad Portuaria de Guayaquil                                              |
| <b>ARCOM</b>      | Agencia de Regulación y Control Minero                                        |
| <b>BCE</b>        | Banco Central del Ecuador                                                     |
| <b>CGE</b>        | Contraloría General del Estado                                                |
| <b>CELEC EP</b>   | Empresa Pública Estratégica<br>Corporación Eléctrica del Ecuador              |
| <b>CJ</b>         | Consejo de la Judicatura                                                      |
| <b>CN</b>         | Consulta de Norma                                                             |
| <b>CNE</b>        | Consejo Nacional Electoral                                                    |
| <b>CNJ</b>        | Corte Nacional de Justicia                                                    |
| <b>COESCOPE</b>   | Código Orgánico de las Entidades<br>de Seguridad Ciudadana y Orden<br>Público |
| <b>COGEP</b>      | Código Orgánico General de<br>Procesos                                        |
| <b>COIP</b>       | Código Orgánico Integral Penal                                                |
| <b>CONGOPE</b>    | Consortio de Gobiernos Autónomos<br>Provinciales del Ecuador                  |
| <b>CONAGOPARE</b> | Consejo Nacional de Gobiernos<br>Parroquiales Rurales del Ecuador             |
| <b>COOTAD</b>     | Código Orgánico de Organización<br>Territorial, Autonomía y Descentralización |
| <b>Corte IDH</b>  | Corte Interamericana de Derechos<br>Humanos                                   |
| <b>EE</b>         | Estado de Excepción                                                           |

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EI</b>      | Acción Extraordinaria de Protección contra<br>Decisiones de la Justicia Indígena         |
| <b>EP</b>      | Acción Extraordinaria de Protección                                                      |
| <b>GAD</b>     | Gobierno Autónomo Descentralizado                                                        |
| <b>GADM</b>    | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal                                              |
| <b>HC</b>      | Hábeas Corpus                                                                            |
| <b>HD</b>      | Hábeas Data                                                                              |
| <b>IESS</b>    | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                                                |
| <b>IA</b>      | Acción Pública de Inconstitucionalidad de<br>Actos Administrativos con Efectos Generales |
| <b>IN</b>      | Acción Pública de Inconstitucionalidad de<br>Actos Normativos                            |
| <b>IS</b>      | Acción de Incumplimiento de Sentencias y<br>Dictámenes Constitucionales                  |
| <b>IO</b>      | Acción de Inconstitucionalidad por Omisión                                               |
| <b>JC</b>      | Jurisprudencia Vinculante de Medidas Cautelares                                          |
| <b>LODEFER</b> | Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y<br>la Recreación                         |
| <b>LOEP</b>    | Ley Orgánica de Empresas Públicas                                                        |
| <b>LOGJCC</b>  | Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y<br>Control Constitucional                   |
| <b>LOSEP</b>   | Ley Orgánica del Servicio Público                                                        |
| <b>LOT</b>     | Ley Orgánica de Telecomunicaciones                                                       |
| <b>MAG</b>     | Ministerio de Agricultura y Ganadería                                                    |
| <b>MC</b>      | Medidas Cautelares                                                                       |
| <b>MEF</b>     | Ministerio de Economía y Finanzas                                                        |
| <b>MERNR</b>   | Ministerio de Ambiente, Agua y Transición<br>Ecológica                                   |
| <b>MDMQ</b>    | Municipio del Distrito Metropolitano de Quito                                            |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MDT</b>            | Ministerio de Trabajo                                                                                                        |
| <b>MIDENA</b>         | Ministerio de Defensa Nacional                                                                                               |
| <b>MINEDUC</b>        | Ministerio de Educación, Deporte y Cultura                                                                                   |
| <b>MINEDUC</b>        | Ministerio de Educación                                                                                                      |
| <b>MSP</b>            | Ministerio de Salud Pública                                                                                                  |
| <b>MPCEIP</b>         | Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca                                                             |
| <b>NNA</b>            | Niños, niñas y adolescentes                                                                                                  |
| <b>OC-24/17</b>       | Opinión Consultiva de 24 de noviembre de 2017 (Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo) |
| <b>Petroecuador</b>   | Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador                                                                 |
| <b>PGE</b>            | Procuraduría General del Estado                                                                                              |
| <b>PNE</b>            | Policía Nacional del Ecuador                                                                                                 |
| <b>Registro Civil</b> | Registro Civil, Cedulación e Identificación                                                                                  |
| <b>SENAE</b>          | Servicio Nacional de Aduana del Ecuador                                                                                      |
| <b>SOLCA</b>          | Sociedad de Lucha contra el Cáncer                                                                                           |
| <b>SRI</b>            | Servicio de Rentas Internas                                                                                                  |
| <b>TCA</b>            | Tribunal Contencioso Administrativo                                                                                          |
| <b>TCE</b>            | Tribunal Contencioso Electoral                                                                                               |
| <b>TDCA</b>           | Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo                                                                          |
| <b>TDCAT</b>          | Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario                                                             |
| <b>TI</b>             | Tratado Internacional                                                                                                        |
| <b>UNACH</b>          | Universidad Nacional de Chimborazo                                                                                           |

# Contenidos

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>DECISIONES DE SUSTANCIACIÓN</b>                                                 | 9  |
| <b>I. Decisiones relevantes</b>                                                    | 10 |
| Destacadas                                                                         | 10 |
| IN – Acción Pública de Inconstitucionalidad                                        | 10 |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                           | 11 |
| Sentencias derivadas de procesos constitucionales                                  | 11 |
| JP – Jurisprudencia Vinculante de Acción de Protección                             | 12 |
| Novedades                                                                          | 14 |
| IN - Acción Pública de Inconstitucionalidad                                        | 14 |
| CN - Consulta de norma                                                             | 15 |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                           | 15 |
| Sentencias derivadas de procesos constitucionales                                  | 15 |
| Sentencias derivadas de procesos ordinarios                                        | 19 |
| EI – Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la Justicia Indígena | 24 |
| <b>II. Decisiones estimatorias</b>                                                 | 25 |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                           | 25 |
| Sentencias derivadas de procesos constitucionales                                  | 25 |
| IS – Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales          | 27 |
| <b>III. Decisiones desestimatorias</b>                                             | 30 |
| IN – Acción Pública de Inconstitucionalidad                                        | 30 |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                           | 31 |
| Sentencias derivadas de procesos constitucionales                                  | 31 |
| Sentencias derivadas de procesos ordinarios                                        | 34 |
| AN - Acción por incumplimiento                                                     | 34 |
| IS – Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales          | 35 |
| <b>IV. Otras decisiones</b>                                                        | 37 |
| TI - Tratado Internacional                                                         | 37 |
| <b>DECISIONES DE LA SALA DE ADMISIÓN</b>                                           | 38 |
| <b>Admisión</b>                                                                    | 39 |
| IN – Acción Pública de Inconstitucionalidad                                        | 39 |
| IA – Inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales           | 41 |
| CN – Consulta de norma                                                             | 41 |
| EI – Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la Justicia Indígena | 41 |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                           | 42 |
| Causas derivadas de procesos constitucionales                                      | 42 |
| Causas derivadas de procesos ordinarios                                            | 49 |

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inadmisión</b>                                                                                  | <b>51</b> |
| <b>IN – Acción Pública de Inconstitucionalidad de Actos Normativos</b>                             | <b>51</b> |
| <b>AN – Acción por Incumplimiento</b>                                                              | <b>54</b> |
| <b>CN – Consulta de norma</b>                                                                      | <b>56</b> |
| <b>IO – Inconstitucionalidad por Omisión</b>                                                       | <b>57</b> |
| <b>EP – Acción Extraordinaria de Protección</b>                                                    | <b>57</b> |
| Objeto (Ar. 58 de la LOGJCC) Sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia.. | 57        |
| Oportunidad (Art. 60 de la LOGJCC)                                                                 | 58        |
| <b>DECISIONES DE LA SALA DE SELECCIÓN</b>                                                          | <b>59</b> |
| <b>JP – Jurisprudencia Vinculante de Acción de Protección</b>                                      | <b>60</b> |
| <b>JC – Jurisprudencia Vinculante de Medidas Cautelares</b>                                        | <b>60</b> |
| <b>SEGUIMIENTO DE SENTENCIAS Y DICTÁMENES</b>                                                      | <b>62</b> |
| <b>I. Decisiones relevantes</b>                                                                    | <b>63</b> |
| Destacadas                                                                                         | 63        |
| CN – Consulta de norma                                                                             | 63        |
| <b>II. Autos de seguimiento</b>                                                                    | <b>64</b> |
| EP – Acción Extraordinaria de Protección                                                           | 64        |
| IS – Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes                                                     | 65        |
| CN – Consulta de norma                                                                             | 66        |
| JP – Jurisprudencia Vinculante de Acción de Protección                                             | 67        |
| <b>AUDIENCIAS DE INTERÉS</b>                                                                       | <b>68</b> |
| Audiencias públicas telemáticas                                                                    | 69        |

# DECISIONES DE SUSTANCIACIÓN

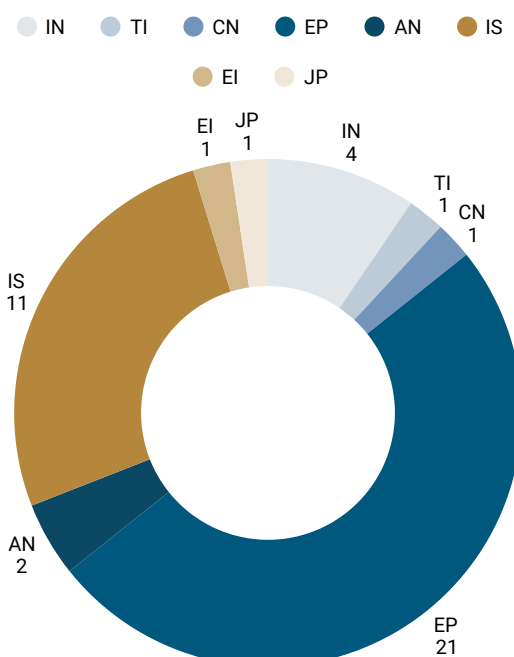
## Procesos sujetos a conocimiento de la Corte Constitucional

La sección de Decisiones de Sustanciación del boletín presenta un detalle de las sentencias y dictámenes constitucionales aprobadas por el Pleno de la Corte Constitucional notificadas **entre el 01 al 31 de agosto de 2026**. Durante el periodo indicado, **el Pleno aprobó**: (4) IN, (1) TI, (1) CN, (21) EP, (2) AN, (11) IS, (1) EI y (1) JP.

Entre estas decisiones, **la Corte aceptó (10) EP y (6) IS**. En tales decisiones tuteló los derechos como: al debido proceso en las garantías de ser juzgado con observancia del trámite propio, de ser juzgado por un juez competente, de la motivación y a recurrir; y a la seguridad jurídica; entre otros.

El presente boletín no incluye todos los autos y resoluciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Decisiones constitucionales  
notificadas (sentencias y dictámenes)



# I. Decisiones relevantes



Destacadas

IN

## Acción Pública de Inconstitucionalidad

**Sentencia 34-18-IN/26 y voto salvado**

**Constitucionalidad condicionada del literal b) y de los incisos cuarto y quinto del artículo 6 de la “Ordenanza de funciones de la Policía Municipal en el Ordenamiento de la Ciudad” expedida por el Concejo Cantonal de Ambato.**

IN presentada en contra de los artículos 5, numeral 1 literal e) y 6 de la ordenanza 400.123, “Ordenanza de funciones de la Policía Municipal en el Ordenamiento de la Ciudad”, expedida por el Concejo Cantonal de Ambato el 11 de julio de 2006.

El accionante alegó que el procedimiento previsto en el literal b) y en los incisos cuarto y quinto del artículo 6 de la Ordenanza que regula el retiro de bienes por comercio no autorizado en el espacio público es incompatible con el derecho a la defensa. La Corte no se pronunció sobre el artículo 5, numeral 1, literal e), al considerar que la demanda no cumplió con la carga argumentativa mínima exigida respecto de esa disposición.

La Corte señaló que la medida administrativa de retiro de bienes comercializados sin autorización puede comprenderse como un mecanismo de control que no resulta contrario a los preceptos constitucionales cuando se implementa como último recurso y en un sentido preventivo más que meramente sancionatorio, con las garantías que de ello se desprende. En este sentido, dicha medida puede comprenderse como un mecanismo de última *ratio*, que demanda de los agentes municipales una evaluación de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad antes de aplicarla.

Por tanto, la Corte concluyó que la norma impugnada será constitucional siempre que: i) su aplicación respete un cierto margen de tolerancia jurídica a los presuntos infractores; aplicándola como una medida de ultima ratio y no una actuación automática de primera intervención, de modo que su adopción esté precedida de un requerimiento de cumplimiento, verbal o escrito, y de un plazo prudencial para que la persona regularice su actividad o retire voluntariamente sus bienes, y proceda únicamente cuando tales actuaciones no hayan sido atendidas; ii) garantice a la persona afectada el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa dentro del procedimiento administrativo que se sustancie con posterioridad a la adopción de la medida, para lo cual, en el mismo acto del retiro, deberá entregársele una constancia escrita que identifique los bienes retenidos, el hecho imputado, el término del que dispone para reclamarlos y la autoridad ante la cual debe hacerlo; y, (iii) garantice la conservación de los bienes perecibles objeto de la presunta infracción, a través de medios materiales efectivos. En consecuencia, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada.



Destacada

La jueza Alejandra Cárdenas Reyes emitió un voto salvado en el que se apartó de la decisión de mayoría porque no consideró integralmente la conclusión de la sentencia 35-18-IN/26 que estableció que no pueden aplicarse medidas provisionales o sancionatorias mientras no exista un procedimiento normativo para obtener una autorización. De igual forma, cuestionó que la constitucionalidad de la disposición se sustentara en un instructivo interno que no forma parte de la norma sometida a control y que, mediante una interpretación condicionada, se incorporaran garantías que no constan en su texto para posteriormente ordenar su inclusión en la ordenanza. Por estas razones, estimó que las disposiciones impugnadas debían ser declaradas inconstitucionales.

---



## Acción Extraordinaria de Protección

Sentencias derivadas de procesos constitucionales

### Sentencia 1136-23-EP/26

**Tutela de la garantía de la motivación en una decisión que ordenó reformar un Acuerdo Ministerial pese a declarar previamente que no vulneró derechos constitucionales.**

EP presentada en contra de una sentencia de segunda instancia que aceptó parcialmente la demanda de acción de protección por la emisión de un acuerdo ministerial que adjudicó varias hectáreas a la comunidad shuar Wisui. La Corte aceptó la EP.

En cuanto a las alegaciones respecto a si la Corte Provincial incurrió en un vicio de incoherencia lógica entre la premisa sobre la existencia del derecho a la consulta prelegislativa y la conclusión sobre su inaplicabilidad a los hechos del caso, la Corte verificó que el texto de la sentencia no contiene enunciados contradictorios entre sí, en los que se sostenga, por un lado, que la adjudicación debió ser precedida de una consulta prelegislativa que incluyese a la comunidad Yukaip y, por otro lado, que tal consulta no era necesaria. Por ende, la Corte constató que no existe un vicio de incoherencia lógica en el pronunciamiento respecto de la no vulneración al derecho a la consulta prelegislativa.

En cuanto a las alegaciones respecto a si la Corte Provincial incurrió en un vicio de incoherencia decisional al ordenar la modificación del Acuerdo Ministerial, pese a determinar previamente que su emisión no vulneró derechos constitucionales, la Corte determinó que la decisión es inconsistente frente a las conclusiones de la misma sentencia, en tanto reconoce en dos ocasiones, en relación con diferentes derechos, que la emisión del Acuerdo Ministerial no conllevó una vulneración de tales derechos, y por otro lado ordene su reforma, no por vicios hallados en este, sino por la atención poco oportuna de una denuncia relativa a dicho Acuerdo. Por lo que, la decisión analizada incurrió en el tipo de deficiencia motivacional de apariencias, específicamente en el vicio motivacional de incoherencia decisional. En tal razón, la Corte ordenó el reenvío para que un nuevo tribunal resuelva los recursos interpuestos por las partes.

---



# JP Jurisprudencia Vinculante de Acción de Protección

## Sentencia 1725-25-JP/26 y acumulado y votos concurrentes



### Criterios respecto de la idoneidad y eficacia de la vía ordinaria en el marco del análisis de una acción de protección (AP).

En sentencia de revisión, la Corte conoció dos AP. La primera, fue presentada con el propósito de dejar sin efecto la inscripción de un bien inmueble, y obtener la declaración de su titularidad (AP1), y la segunda, planteada con la finalidad de alterar las medidas de reparación dispuestas en la primera AP (AP2). En primer lugar, la Corte encontró que las judicaturas que conocieron la AP1 no eran competentes en razón del territorio. Posteriormente, la Corte verificó que las acciones planteadas desnaturalizaron el objeto de la garantía.

Sobre la AP1, la Corte encontró que la pretensión del accionante se dirigía exclusivamente a la determinación de la titularidad del predio. Asimismo, encontró que la pretensión formulada por el accionante no podía ser satisfecha, de ninguna manera, mediante AP, sino debió ser atendida mediante la vía judicial ordinaria, que era la vía idónea y eficaz. En consecuencia, la AP no constituía el mecanismo apropiado para resolver la controversia planteada, pues esta versaba sobre la validez de un contrato y los efectos de su inscripción registral, materias cuya resolución corresponde a la justicia ordinaria. Por ello, concluyó que la AP fue desnaturalizada, al estar inmersa en las causales de improcedencia previstas en los números 4 y 5 del artículo 42 de la LOGJCC, además, generó un grave daño a la administración de justicia.

Sobre la AP2, la Corte encontró que, aunque la accionante no impugnó directamente la sentencia dictada en la AP1, su pretensión estaba dirigida a dejar sin efecto una de las medidas de reparación allí ordenadas, esto es, la anulación de la inscripción del inmueble y, por tanto, el efecto perseguido era recuperar la titularidad de la propiedad en disputa. Además, la concesión de la acción alteraba las medidas de reparación otorgadas en la AP1, pues dicha acción dejó sin efecto la inscripción de compraventa del bien inmueble en disputa. Por tanto, la pretensión de la accionante 2 no era susceptible de ser abordada a través de la garantía jurisdiccional y debía ser inadmitida *in limine*, por lo que también fue desnaturalizada. La Corte determinó que los jueces que conocieron la AP1 incurrieron en error inexcusable y que la jueza que aceptó la AP2 incurrió en dolo, asimismo, verificó la existencia de abuso del derecho por parte de los abogados patrocinadores de las AP.

La Corte desarrolló criterios acerca del análisis de idoneidad y eficacia de la vía ordinaria y que en los casos donde exista una vía idónea y eficaz en la justicia ordinaria que le permita al accionante alcanzar sus pretensiones en sus condiciones particulares, resulta razonable que los jueces constitucionales no realicen el análisis de vulneración de derechos constitucionales y declaren la improcedencia de la acción.



Las juezas Alejandra Cárdenas Reyes y Karla Andrade Quevedo emitieron un voto concurrente conjunto, en el que señalaron, entre otras cosas, la regla general debe seguir siendo que las autoridades judiciales examinen los hechos y las vulneraciones de derechos alegadas y solo en escenarios específicos, categóricos y delimitados por la Constitución, la ley o la jurisprudencia de la Corte, puede analizarse primero la procedencia y prescindirse de un examen pormenorizado de los derechos involucrados. Además, señalaron que la existencia de una vía ordinaria capaz de satisfacer la pretensión no basta, por sí sola, para excluir la AP.

El juez Jhoel Escudero Soliz, en su voto concurrente, mencionó que la idoneidad y eficacia de la vía ordinaria no puede asumirse como una regla general que antecede a la obligación judicial de verificar la posible existencia de vulneración de los derechos constitucionales y, menos aún, como una obligación del accionante de demostrar la falta de idoneidad y eficacia de la vía ordinaria para justificar la activación de la vía constitucional.



 **Son Tus Derechos**  
Las decisiones que debes conocer para  
proteger y exigir tus derechos.





## Novedades

# IN Acción Pública de Inconstitucionalidad

## Sentencia 78-22-IN/26

**Constitucionalidad condicionada de las expresiones “título de abogada o abogado” y “abogadas y abogados graduados en el extranjero” contenidas en los artículos 324.1 y 332 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).**

IN presentada en contra de las expresiones “título de abogada o abogado” y “abogadas y abogados graduados en el extranjero”, contenidas en los artículos 324 numeral 1 y 332 del COFJ, así como del artículo 2 del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de las y los Egresados de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas.

El accionante alegó que las expresiones impugnadas podrían interpretarse en el sentido de que únicamente podían acceder a las prácticas preprofesionales quienes posean un título cuya denominación coincida literalmente con las palabras “abogada” o “abogado”. Así, se excluiría a quienes obtuvieron títulos con denominaciones diferentes, como “licenciado en Derecho” o “graduado en Derecho”, vulnerando los derechos a la igualdad y no discriminación, al trabajo y a desarrollar actividades económicas. Luego del análisis correspondiente, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada.

Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, al trabajo y a desarrollar actividades económicas, la Corte señaló que, respecto de las personas que obtuvieron su título en el extranjero, el acceso al patrocinio comprende dos momentos: el reconocimiento académico e inscripción del título en Ecuador y, posteriormente, la verificación de los requisitos propios de la habilitación profesional, como las prácticas preprofesionales. La Corte indicó que la inscripción del título acredita el nivel de formación, aunque no habilita por sí sola para el ejercicio profesional. En consecuencia, una vez que la autoridad ha determinado que un título extranjero corresponde al tercer nivel y al campo del Derecho, el Consejo de la Judicatura (CJ) no puede realizar una nueva valoración académica ni exigir que el diploma tenga una determinada denominación literal. En este contexto, la Corte consideró que las disposiciones impugnadas admiten una interpretación literal según la cual el título extranjero debería contener las palabras “abogada” o “abogado”, pero también una interpretación sistemática del artículo 332 del COFJ que no exige una nomenclatura determinada, sino que el título haya sido inscrito como correspondiente al tercer nivel y al campo del Derecho.

Por tanto, aunque el CJ había modificado posteriormente su criterio y, para 2026, informó que otorgaba el mismo tratamiento a los títulos denominados “abogado”, “licenciado en Derecho”, “graduado en Derecho” u otros similares, la Corte consideró necesario excluir expresamente la interpretación literal que había sido aplicada institucionalmente en 2021 (sólo “abogados”) y que se encontraba vigente cuando el accionante presentó la demanda. En consecuencia, declaró la constitucionalidad condicionada de las expresiones “título de abogada o abogado” y “abogadas y abogados graduados en el extranjero”, contenidas en los artículos 324, numeral 1, y 332 del COFJ, estableciendo que son constitucionales siempre que se interpreten en el sentido de que comprenden a las personas cuyo título extranjero haya sido inscrito por la autoridad competente como correspondiente al tercer nivel de formación y al campo del Derecho, independientemente de la denominación utilizada por la institución de educación superior extranjera que lo expidió.



**Sentencia 47-21-CN/26, voto concurrente y voto salvado**

**Constitucionalidad de la disposición del artículo 171 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona como violación el acceso carnal con una persona menor de 14 años.**

La Corte examinó la constitucionalidad acerca del artículo 171 numeral 3 del COIP, que tipifica el delito de violación cuando el acto es cometido en contra de una persona menor de 14 años por parte de otra persona menor de 18 años. La Corte analizó si esta disposición es compatible con el derecho de las y los adolescentes a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias sobre su sexualidad, particularmente cuando se trata de relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes.

Al respecto, la Corte señaló que el límite de 14 años establecido por el legislador constituye una medida de protección de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes y no desconoce su condición de sujetos de derechos. Además, recordó que, conforme a la sentencia 13-18-CN/21, la posibilidad de que el consentimiento tenga relevancia jurídica en materia sexual corresponde a adolescentes mayores de 14 años, atendiendo a su desarrollo progresivo.

En consecuencia, la Corte concluyó que el artículo 171 numeral 3 del COIP es compatible con el derecho de las personas menores de 14 años a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias sobre su sexualidad. No obstante, precisó que la sola edad de la persona no determina automáticamente la responsabilidad del adolescente procesado, pues las autoridades deben analizar la configuración de todos los elementos de la infracción y aplicar las reglas y principios de la justicia especializada para adolescentes.

La jueza Karla Andrade Quevedo, en su voto concurrente consideró que se debía realizar un control concreto de constitucionalidad y un análisis de proporcionalidad de la limitación al derecho de los adolescentes menores de 14 años a tomar decisiones sobre su sexualidad, examinando la finalidad de la norma, su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. A su criterio, la sentencia 13-18-CN/21 no podía aplicarse de manera automática.

El juez Richard Ortiz Ortiz, en su voto salvado consideró que debía abstenerse de resolver la consulta, pues al haberse declarado la prescripción de la acción, esta habría perdido el requisito de relevancia sustantiva.

---

**EP** **Acción Extraordinaria de Protección**

Sentencias derivadas de procesos constitucionales

**Sentencia 788-22-EP/26 y voto concurrente**

**No se vulneró el derecho a la seguridad jurídica al determinar la titularidad de una pensión por discapacidad permanente por medio de una AP.**

EP presentada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de la sentencia de segunda instancia, dentro de una acción de protección (AP) planteada por la madre de una persona con discapacidad intelectual, debido a la negativa del IESS de concederle una jubilación por invalidez. Mientras la Unidad Judicial había rechazado la acción al considerar que el IESS había actuado conforme a la normativa aplicable, la Corte Provincial aceptó el recurso de apelación. La Corte, luego del análisis correspondiente, desestimó la EP.

Sobre el derecho a la seguridad jurídica, la Corte señaló que el artículo 42 numeral 5 de la LOGJCC establece que la AP es improcedente cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. Sin embargo, ello no impide que, una vez determinada la existencia de una vulneración constitucional, la jueza o juez constitucional establezca las medidas de reparación integral necesarias para restituir el derecho vulnerado.

En este caso, la Corte evidenció que la Corte Provincial constató que la condición de salud de la accionante, agravada por distintas patologías y una discapacidad del 86 %, había producido una incapacidad permanente total para trabajar. En función de ello, aplicó el artículo 84 de la Ley Orgánica de Discapacidades, y concluyó que correspondía reconocerle una pensión por discapacidad permanente total o absoluta.

La Corte consideró que esta actuación no implicó que la Corte Provincial hubiera declarado un derecho distinto de manera arbitraria, sino que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos jurídicos correspondientes, dispuso una medida destinada a restituir de manera efectiva los derechos vulnerados. En particular, advirtió que el propio IESS reconoció, que la controversia no correspondía propiamente a una jubilación por invalidez, sino que debía analizarse a la luz de la discapacidad o de la jubilación por vejez. En esa medida, la orden de conceder la pensión por discapacidad guardaba relación directa con la vulneración constitucional identificada y con las circunstancias particulares de la accionante. Por tanto, la Corte concluyó que la medida de reparación adoptada por la Corte Provincial no desconoció el derecho a la seguridad jurídica. En consecuencia, la Corte desestimó la acción y ordenó el archivo de la causa. La Corte exhortó al IESS a cumplir sus obligaciones constitucionales y legales bajo estándares de calidad, eficiencia, accesibilidad y trato humano, especialmente respecto de las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

La jueza Karla Andrade Quevedo emitió un voto concurrente, pues consideró que una medida de reparación equivocada o inadecuada no genera, por esa sola circunstancia, una vulneración a la seguridad jurídica; sin embargo, la potestad reparadora no puede convertirse en un mecanismo para asumir competencias ajenas a la justicia constitucional y declarar directamente la titularidad de una prestación distinta cuya procedencia corresponde determinar a la autoridad competente, como ocurrió en este caso.

---

## **Sentencia** **1980-22-EP/26 y voto concurrente**

**No procede la acción de protección (AP) para cuestionar un acta de Asamblea Extraordinaria de una comunidad indígena ni la validez del registro de su directiva.**

EP presentada contra la sentencia de apelación que aceptó la AP planteada por el presidente del sector rural Shiguacocha en contra de la secretaria de Derechos Humanos y el secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, y que cuestionó el acta de la Asamblea Extraordinaria de una comunidad indígena y el acto de la Secretaría de Derechos Humanos que registró su nueva directiva de la comunidad y excluyó e incluyó socios de la comunidad respectiva. La Corte aceptó la EP y declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

La Corte verificó que la Sala concedió una AP manifiestamente improcedente, puesto que el accionante pretendía que la justicia constitucional examine el acta de la Asamblea Extraordinaria de la comunidad Shiwa Cocha del Río Anzu, así como la validez del registro de su directiva, mas no solicitaba un pronunciamiento sobre alegadas violaciones de derechos constitucionales. La Corte aclaró que la AP no es una garantía idónea para cuestionar el desarrollo ni el resultado de la elección de la directiva de una comunidad indígena, ni la inclusión o exclusión de sus socios.



Asimismo, la Corte recordó que la Constitución reconoce el derecho a la autodeterminación de las comunidades, pueblos y nacionalidades, así como a desarrollar sus propias formas de organización social, lo que comprende definir su estructura de gobierno, designar a sus autoridades y elegirlos. En caso de suscitarse controversias sobre estos aspectos, estas deben resolverse mediante los mecanismos previstos en los estatutos o en el derecho propio de la respectiva comunidad, sin perjuicio del control constitucional que ejerce esta Corte sobre las decisiones jurisdiccionales de la autoridad indígena a través de la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.

En el caso concreto, la Corte Provincial no advirtió que los actos impugnados correspondían, por un lado, a un acta adoptada en el marco de una asamblea comunitaria extraordinaria y, por otro, al acto mediante el cual la Secretaría de Derechos Humanos registró la directiva electa de la comunidad indígena Shiwa Cocha del Río Anzu, en ejercicio de la facultad formal prevista en el Decreto Ejecutivo 193. Por ello, la Corte concluyó que la controversia debía resolverse en el seno de la comunidad, mediante los mecanismos de resolución de conflictos previstos en su estatuto o derecho propio, sin perjuicio del control constitucional sobre las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las autoridades indígenas. Como consecuencia, dejó sin efecto la sentencia impugnada, declaró improcedente la AP y dispuso su archivo.

La jueza Claudia Salgado Levy en su voto concurrente señaló que el debate constitucional consistía en establecer si las actuaciones cuestionadas, incluido el acto administrativo de registro, vulneraron derechos constitucionales de varios de sus miembros y, a partir de ello, establecer si existía una vía ordinaria adecuada y eficaz para brindar una tutela efectiva frente a las posibles afectaciones alegadas.

---

## Sentencia [1621-23-EP/26](#)

**La sentencia que resolvió una acción de protección (AP) contra un acto que daba cumplimiento a un hábeas data (HD) posteriormente dejado sin efecto por la Corte, no constituye objeto de EP.**

EP presentada contra la sentencia que aceptó el recurso de apelación y aceptó la AP planteada en contra de los entonces Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) y el de Ganadería y Agricultura (MAG) en el que se impugnaron acuerdos que fueron consecuencia del cumplimiento de una acción de hábeas data (HD).

La Corte rechazó la EP al concluir que la causa carece actualmente de objeto. Verificó que, si bien al momento de la presentación de la EP la sentencia impugnada se encontraba vigente, durante la sustanciación de esta causa, se emitió la sentencia 180-22-EP/24 en la cual la Corte dejó sin efecto las sentencias dictadas en el HD mencionado, así como los actos posteriores emitidos en cumplimiento de las medidas de reparación integral ordenadas en dichas decisiones. Por ello, desapareció el presupuesto fáctico y jurídico que sustentaba la controversia planteada en la presente EP. Como consecuencia, la Corte concluyó que, actualmente por hechos supervinientes posteriores a la presentación de la EP, esta carece de objeto.



## **Sentencia 2332-24-EP/26**

**Tutela del derecho a la seguridad jurídica cuando la acción de protección (AP) es manifiestamente improcedente al tener como pretensión un reclamo de carácter laboral y se dirige al pago de utilidades.**

EP presentada en contra de una sentencia de primera y segunda instancia que aceptó la demanda de AP sobre el pago de utilidades correspondientes a los ejercicios fiscales de 2003 a 2007 en la Empresa Pública Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP). La Corte aceptó la EP.

La Corte analizó las alegaciones respecto a si las decisiones judiciales impugnadas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de CELEC, porque aceptaron una demanda de AP que era manifiestamente improcedente, por referirse al pago de utilidades de trabajadores.

La Corte identificó que el conflicto, en lo medular, se trató de una materia que contaba con mecanismos jurisdiccionales ordinarios idóneos y eficaces para su conocimiento y resolución en la jurisdicción ordinaria. Por ello, la pretensión –pago de utilidades a trabajadores de empresas tercerizadoras e intermediarias–, por su naturaleza y exigencia de jueces especializados, no podía sustanciarse por una vía ajena a aquella expresamente prevista por el ordenamiento jurídico para la tutela de este tipo de reclamaciones, pues requería evaluar la condición de los accionantes, la existencia del derecho a recibir utilidades y la forma de ejecutar su pago.

En consecuencia, las judicaturas accionadas tenían la obligación de declarar la improcedencia de la AP. Al no hacerlo y, por el contrario, aceptarla, vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de CELEC EP. La Corte determinó que ello no implica que todos los casos relacionados con el pago de utilidades de trabajadores tercerizados o intermediarios sean improcedentes bajo una AP, pues se deberá analizar, caso a caso, si existen situaciones que comprometan grave o notoriamente la dignidad o autonomía de los trabajadores. Por lo tanto, la Corte dispuso dejar sin efecto las sentencias impugnadas y declarar la improcedencia de la AP.

---

## **Sentencia 791-25-EP/26 y votos salvados**

**Vulneración del derecho a la seguridad jurídica al haber aceptado una acción de protección (AP) manifiestamente improcedente en la que se pretendía la revisión de un acto administrativo que dispuso la destitución de un juez.**

EP presentada por el Consejo de la Judicatura (CJ) en contra de la sentencia de segunda instancia dictada en el marco de una AP, mediante la cual se dejó sin efecto la resolución que dispuso la destitución de un juez por error inexcusable. La Corte, luego del análisis correspondiente, aceptó la EP.

Sobre el derecho a la seguridad jurídica, la Corte recordó que las AP no pueden ser utilizadas para resolver cuestiones ajenas a su objeto ni para reemplazar a la justicia ordinaria. Así, cuando una autoridad judicial acepta una garantía jurisdiccional manifiestamente improcedente, vulnera este derecho. En particular, una AP es manifiestamente improcedente cuando, por la especificidad de la pretensión, resulta evidente que existe otra vía idónea y eficaz en la justicia ordinaria.

En este caso, la Corte advirtió que, pese a que el actor alegó la vulneración de los derechos a la independencia judicial, seguridad jurídica, debido proceso y trabajo, sus argumentos centrales se limitaron a cuestionar la legalidad de su destitución como juez, específicamente, la conformación del quorum reglamentario del Pleno del CJ para adoptar dicha decisión. De esa forma, la Corte evidenció que las pretensiones del actor se orientaron a dejar sin efecto la resolución de destitución, eliminar la prohibición de ejercer cargo público y obtener el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. De ahí que, la controversia se circunscribió a la impugnación de un acto administrativo expedido en el marco de un procedimiento disciplinario, cuya revisión correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En esa medida, la Corte corroboró que la Corte Provincial centró su análisis en verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables al procedimiento disciplinario y en la validez formal del acto administrativo que dispuso la destitución, sin realizar un análisis autónomo de una vulneración a la independencia judicial. Por tanto, la Corte Provincial debió declarar la improcedencia de la AP, pues el acto administrativo podía ser impugnado mediante la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo esta la vía idónea y eficaz para la pretensión del accionante. La Corte dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia, declaró improcedente la AP y ordenó su archivo. Asimismo, dispuso dejar sin efecto las actuaciones administrativas y judiciales realizadas en fase de ejecución y que, en caso de existir pagos efectuados, el CJ adopte las acciones necesarias para el reintegro de estos valores.

El juez Jhoel Escudero Soliz emitió un voto salvado, puesto que consideró que la AP, si bien se centra en la forma como fue destituido un juez, a esta alegación se le añadía el efecto en la vulneración de la garantía a la estabilidad del cargo de los jueces, relativa al principio de independencia judicial. Al revelarse un posible escenario constitucional, esta acción no debía ser calificada como manifiestamente improcedente. La jueza Alejandra Cárdenas Reyes también emitió un voto salvado, al considerar que la sentencia de mayoría parte de una caracterización incorrecta de la controversia al reducirla a un conflicto laboral, pues la demanda planteaba alegaciones relacionadas con la independencia judicial y con el respeto a las garantías que debían observarse durante el procedimiento disciplinario que culminó con la destitución del actor. Tales alegaciones dotaban al caso de una dimensión constitucional que impedía calificar la acción como manifiestamente improcedente, por lo que debía de ser desestimada.

## **EP** **Acción Extraordinaria de Protección**

Sentencias derivadas de procesos ordinarios

### **Sentencia 192-22-EP/26, votos concurrentes y voto salvado**

**Tutela de la garantía de juez competente en virtud de la aplicación de la sentencia 1010-18-EP/23, que reconstruyó la regla de precedente contenida en la sentencia 1754-18-EP/23 respecto al principio kompetenz-kompetenz.**

EP presentada en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (TDCA) que aceptó la demanda de daños y perjuicios presentada en contra de la compañía Teamsourcing Cía. Ltda. y OTECEL S.A., y en contra del auto de inadmisión del recurso de casación, por el incumplimiento de un contrato civil para la distribución de contenido artístico. La Corte aceptó la EP.

La Corte analizó si el TDCA vulneró el derecho de las compañías accionantes al debido proceso en la garantía de juez competente, por haberse pronunciado sobre una disputa que le correspondía conocer a un tribunal arbitral y haber analizado la validez del convenio arbitral. Así, advirtió que solo la compañía accionante Teamsourcing Cía. Ltda. agotó los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico tendientes a subsanar el vicio de incompetencia. De esta manera, el análisis atañe únicamente respecto a esta compañía accionante.

La Corte, al analizar la vulneración de la garantía de juez competente en la sentencia 1010-18-EP/23, reconstruyó la regla de precedente contenida en la sentencia 1754-18-EP/23 en el siguiente sentido: Si, (i) dentro de un proceso judicial se alega la existencia de un convenio arbitral como excepción previa, y (ii) los jueces que conocen dicho caso se pronuncian sobre la validez del convenio arbitral, entonces, los jueces irrespetan el principio kompetenz-kompetenz y vulneran la garantía del juez competente. En el presente caso, se desprende que la excepción de convenio arbitral fue alegada de manera oportuna al TDCA por parte de la compañía accionante. Sin embargo, pese a aquello, el TDCA se declaró competente. Por su parte, el TDCA estimó que el convenio arbitral contenido en el contrato era incompleto debido a que no contenía los mecanismos de designación de árbitros. Debido a este análisis, el TDCA procedió a resolver en el fondo la controversia de origen. En consecuencia, la Corte determinó que el TDCA irrespetó el principio kompetenz-kompetenz y vulneró la garantía del juez competente de la compañía accionante, al haberse pronunciado sobre una disputa que le correspondía conocer a un tribunal arbitral y haber analizado la validez del convenio arbitral.

El juez Jhoel Escudero Soliz emitió un voto salvado, en el que precisó su discrepancia al no considerar que el TDCA haya vulnerado el derecho al debido proceso en la garantía de juez competente, ya que su actuación no desplazó a un tribunal arbitral previamente constituido, sino que se limitó a resolver la excepción planteada mediante una valoración mínima del alcance del convenio arbitral.

Los jueces Jorge Benavides Ordóñez y Claudia Salgado Levy emitieron un voto concurrente conjunto, que se fundamenta en que la decisión de aceptar una acción extraordinaria de protección y rechazar la otra produce una fragmentación artificial de un litigio que constituye una única controversia jurídica. Consideraron que la fundamentación de la sentencia debió complementarse con un desarrollo de los principios que rigen el arbitraje, a fin de precisar su alcance y aplicación en el presente caso.

---

## **Sentencia 270-22-EP/26**

### **Aplicación de la Ley de Casación en la admisibilidad de recursos de casación interpuestos en procesos iniciados antes de la vigencia del COGEP.**

EP presentada en contra de la sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo (TDCA) y el auto de inadmisión del recurso de casación emitido por la Sala Nacional, en el marco de una demanda subjetiva en contra del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y la Procuraduría General del Estado. La Corte desestimó la EP.

La Corte analizó si la conjueza debía aplicar el artículo 270 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y disponer que la entidad accionante aclare o complete su recurso de casación, pese a que este había sido presentado bajo la Ley de Casación y el proceso se había iniciado antes de la vigencia del COGEP.

Al respecto, señaló que, conforme a la Disposición Transitoria Primera del COGEP, los procesos iniciados antes de su vigencia debían continuar tramitándose conforme a la normativa vigente al momento de su inicio. Además, destacó que la Resolución 05-2026 de la Corte Nacional de Justicia aclaró que la aplicación del artículo 270 del COGEP para la admisibilidad de los recursos de casación se limita a aquellos procesos sometidos a dicho Código, mas no a los que se sustancian bajo la Ley de Casación. En consecuencia, la Corte concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso, puesto que la conjueza aplicó la normativa procesal correspondiente al caso.

---

## **Sentencia 1207-23-EP/26, votos concurrentes y votos salvados**

**Tutela del derecho al debido proceso en la garantía de recurrir de la accionante cuando la víctima recurra a las decisiones dictadas en el proceso penal que le parecieren contrarias a sus derechos, entre ellos, el de conocer la verdad de los hechos y exigir una reparación integral.**

EP presentada en contra de una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual y el auto que resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación. La Corte aceptó la EP.

En cuanto a las alegaciones respecto a si la Corte Provincial vulneró el derecho a la defensa en la garantía de recurrir de la accionante porque le habría impedido fundamentar y obtener una respuesta de fondo de su recurso de apelación, la Corte verificó que el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, al tratar sobre un posible error del Tribunal Penal en la calificación jurídica del delito, tiene relación con sus derechos a la verdad y a la reparación integral. Así, no es posible mantener el criterio de la sentencia 768-15-EP/20 porque niega la calidad de sujeto procesal reconocido a la víctima en el COIP y en la Constitución, por lo que la víctima puede recurrir todas las decisiones dictadas en el proceso penal que le parecieren contrarias a sus derechos, entre ellos, el de conocer la verdad de los hechos y exigir una reparación integral, sin que la fundamentación de su recurso de apelación esté subordinada a la existencia de una impugnación de Fiscalía y a aspectos relacionados de forma exclusiva con la reparación integral.

En consecuencia, la interpretación adoptada en el fallo de la Corte Provincial fue restrictiva e impidió que la víctima pueda recurrir la decisión, lo que constituyó un obstáculo irrazonable para que el órgano judicial superior revise la decisión adoptada en primera instancia. Esto ocasionó que la accionante no pueda recibir una decisión de fondo respecto de su recurso de apelación y que se consolide la decisión de primer nivel. Por lo que la Corte ordenó que un nuevo tribunal sustancie el proceso con observancia de esta sentencia.

La jueza Alejandra Cárdenas Reyes emitió un voto concurrente, en el que compartió que, en el presente caso, se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir. No obstante, consideró que la Corte debía circunscribir su análisis al escenario específico planteado por el caso, sin que ello implicara afirmar que el ejercicio del derecho a recurrir carece de limitaciones derivadas del sistema adversarial acusatorio.

El juez Alí Lozada Prado emitió un voto salvado en el que señaló que la Corte se habría apartado de forma expresa de la línea jurisprudencial fijada en la sentencia 768-15-EP/20 a través de la sentencia 1505-18-EP/25, debido a que, si se analiza la votación de los jueces constitucionales en la sentencia 1505-18-EP/25, se evidencia que dicha decisión no reunió los votos necesarios para constituir un precedente en sentido estricto. En consecuencia, no puede afirmarse que existió un apartamiento expreso del precedente 768-15-EP/20. Por estas razones, estimó que el voto de mayoría debió inadmitir la EP.

La jueza constitucional Claudia Salgado Levy emitió un voto concurrente, en el que señaló que, además de las razones desarrolladas en la sentencia, resultaba necesario apartarse expresamente de la regla jurisprudencial de la sentencia 768-15-EP/20, a fin de garantizar de forma efectiva la condición de la víctima como sujeto procesal y sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización.

La jueza Karla Andrade Quevedo emitió un voto salvado, en el que estimó que cuando la sentencia de mayoría basa su análisis en la sentencia 1505-18-EP/25, contraría la línea jurisprudencial de la Corte, pues no considera que dicha sentencia no contiene un precedente ni realizó un alejamiento de la regla de precedente contenida en la sentencia 768-15-EP/20, pues no contó con los votos necesarios para el efecto. Además, consideró que no resulta congruente mencionar a ambas sentencias en la argumentación y usarlas como fundamento, pues sus razonamientos son contradictorios.

---

## **Sentencia 391-25-EP/26**

**No se vulnera el derecho a la defensa cuando se notifica a los correos electrónicos señalados previamente por la parte procesal, siempre que estos no hayan sido reemplazados o dejados sin efecto**

EP presentada en contra de una sentencia condenatoria por el delito de abuso de confianza, la sentencia que rechazó el recurso de apelación, la sentencia que declaró improcedente el recurso extraordinario de casación y el auto que negó la solicitud de nulidad por falta de notificación de la decisión de la Sala Nacional. La Corte desestimó la EP.

En su análisis, la Corte planteó problemas jurídicos a resolver únicamente respecto a la sentencia de la Sala Provincial y la decisión de la Sala Nacional. En cuanto a la sentencia de la Sala Provincial, las alegaciones del accionante versaron sobre la presunta vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia, porque se habría desplazado la carga de la prueba a la persona procesada. Ante esta alegación, la Corte concluyó que la Sala examinó la hipótesis alternativa planteada por la defensa del accionante y consideró que requería de una mínima carga de actuación probatoria, en virtud de haber sido propuesta como otra teoría del caso a demostrarse en el proceso. Al evidenciar que esta no fue respaldada con elementos o criterios mínimos que permitieran acreditar la hipótesis de la defensa, fue desestimada. La Corte descartó que la Sala Provincial vulneró la garantía de la presunción de inocencia pues no trasladó la carga de la prueba a la persona procesada.

En cuanto al análisis respecto a si la Sala Nacional vulneró el derecho a la defensa del accionante al omitir notificar la sentencia de casación en los correos electrónicos señalados por su defensa, la Corte concluyó que no se constató que el accionante haya aportado, ni en el proceso de origen ni en su demanda, algún argumento o prueba que desvirtúe la validez de la notificación a los correos de sus otras defensas técnicas. Por lo que descartó que la falta de notificación de la sentencia a los correos señalados causó indefensión al accionante, pues sí fue notificado en otras direcciones señaladas previamente, sin que estas hayan sido desautorizadas o revocadas.

---

## **IS Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales**

### **Sentencia 65-23-IS/26**

### **Antinomia jurisdiccional y desnaturalización de una medida cautelar autónoma (MC).**

IS presentada por antinomia jurisdiccional entre una acción de protección (AP) con medida cautelar y una MC, en el marco de dos procesos presentados en contra de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, por la emisión de la resolución número HTP-RES-0011-22 que resolvió la terminación unilateral del contrato de construcción de las obras civiles del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. La Corte aceptó la IS al verificar que se configuró una antinomia jurisdiccional y la desnaturalización de la medida cautelar autónoma.

La Corte verificó que existe antinomia entre ambas decisiones ya que, la AP rechazó la demanda al concluir que el acto impugnado no vulneró derechos constitucionales y que la controversia debía resolverse en la vía ordinaria. Por su parte, la resolución de la MC consideró que dicho acto podría vulnerar derechos constitucionales. Por otro lado, confirmó que la solicitud de MC fue presentada después de la resolución de la AP y perseguía la misma pretensión y efecto: suspender la terminación unilateral del contrato.

En consecuencia, al existir identidad objetiva y subjetiva, y no haberse presentado nuevos hechos, las MC no podían dejar sin efecto lo resuelto en la AP, desnaturalizando su finalidad y afectando la cosa juzgada. La Corte concluyó que la actuación recayó en error inexcusable por parte de los jueces que resolvieron la MC y el abuso del derecho por parte del abogado que presentó la acción. Finalmente, la Corte dejó sin efecto las decisiones dictadas en el proceso de MC y dispuso su archivo.

---

### **Sentencia 138-23-IS/26**

#### **IS por el presunto incumplimiento de varias medidas de reparación relacionadas con el derecho a la salud, y modulación de medidas por el fallecimiento del beneficiario de la acción de protección (AP).**

IS presentada para exigir el cumplimiento de las medidas ordenadas en una sentencia de apelación de una AP con medidas cautelares, iniciada por una persona con una enfermedad catastrófica contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Centro de Especialidades Letamendi del IESS, y del Hospital de Especialidad Teodoro Maldonado Carbo (Hospital). La Corte aceptó parcialmente la IS. La Corte identificó que la sentencia de AP incluía varias medidas relativas a la prestación del servicio de salud a favor del accionante, específicamente en la especialidad de oncología. Entre ellas, dispuso que el IESS y el Hospital deriven integralmente al accionante a SOLCA para que reciba tratamiento; que los gastos se ajusten a los tarifarios de la red de salud, que el IESS cubra parte de los gastos en conformidad con los parámetros de la sentencia, así como los gastos relativos a los peritajes para la determinación del monto; que el accionante y su grupo familiar cuenten con un programa de atención integral en psicología; y que realicen las evaluaciones del uso e impacto de la medicación suministrada y el seguimiento del tratamiento farmacológico. Finalmente, ordenó que el IESS otorgue, a través de su sitio web, disculpas públicas y la publicación de la sentencia; entre otras.

Tras el análisis correspondiente, la Corte determinó que algunas medidas ordenadas fueron incumplidas por circunstancias ajenas a la voluntad de las entidades obligadas. Por un lado, las medidas de evaluación y seguimiento no pudieron ejecutarse en virtud de la decisión del accionante de recibir el tratamiento con su médico particular, quien era parte de la red de salud del IESS, lo cual evitó que pueda realizar las evaluaciones correspondientes. Por otro lado, otras dependían del cumplimiento de ciertas condiciones para su ejecución, las cuales no se materializaron.

En estos casos, la Corte concluyó que la inejecución no le fue imputable a las entidades accionadas. Finalmente, en virtud del fallecimiento del causante, declaró la imposibilidad fáctica de varias de aquellas medidas, motivo por el cual fueron moduladas en los términos expuestos en la sentencia.

## **EI** Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la Justicia Indígena

### **Sentencia 4-17-EI/26 y votos salvados**

**La ejecución de un proyecto comunitario, al ser una decisión de carácter comunitario, no es una decisión indígena susceptible de EP.**

El presentada por varios comuneros de la comunidad Oñacapac en contra de la decisión adoptada por su Asamblea General el 20 de octubre de 2017, mediante la cual se aprobó la ejecución de un proyecto de apertura y mejoramiento vial y construcción de alcantarillado, con apoyo técnico y financiero del GADM de Saraguro. Los accionantes alegaron que la decisión afectó sus derechos, entre ellos la propiedad, libertad de expresión, defensa y seguridad jurídica. La Corte, luego del análisis correspondiente, rechazó la EP.

Sobre la procedencia de la EP contra decisiones de justicia indígena, la Corte señaló que no toda decisión adoptada por una comunidad indígena constituye una decisión jurisdiccional. Para que pueda ser objeto de esta garantía, debe haber sido emitida por una autoridad indígena en ejercicio de funciones jurisdiccionales y tener como finalidad resolver un conflicto interno mediante normas y procedimientos propios.

En este caso, la Corte evidenció que la resolución de 20 de octubre de 2017 fue adoptada por la Asamblea General Ordinaria de la comunidad Oñacapac, en coordinación con el GADM de Saraguro. Sobre el segundo requisito, la Corte constató que la Asamblea del 20 de octubre de 2017 no tuvo como finalidad resolver un conflicto que hubiera alterado la armonía de la comunidad. No existía una controversia concreta que hubiera motivado la convocatoria, tampoco personas sometidas a juzgamiento ni un procedimiento destinado a establecer responsabilidades o imponer medidas. Por el contrario, la Asamblea estuvo dirigida a adoptar una decisión colectiva sobre la ejecución de un proyecto comunitario, en coordinación con el GADM de Saraguro. Por tanto, la Corte concluyó que se trataba de una decisión de carácter comunitario y no de una decisión de justicia indígena susceptible de EP. En consecuencia, la Corte rechazó la EP y ordenó el archivo de la causa.

La jueza Karla Andrade Quevedo emitió un voto salvado, pues consideró que la Corte omitió pronunciarse sobre la resolución de 26 de octubre de 2017. Al omitir este análisis, la sentencia examinó la demanda y las alegaciones de los accionantes de manera extremadamente rígida y dejó sin una respuesta de fondo sus pretensiones, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva en su elemento de acceso a la justicia. El juez Alí Lozada Prado también emitió un voto salvado, ya que consideró que la demanda no impugnó solo la resolución del proyecto comunitario, sino también la que ordenó castigarlos, y se omitió analizar el conflicto que rompió la armonía de la comunidad a partir de la resolución del proyecto comunitario y que se agravó con la resolución que les castigó.



## II. Decisiones estimatorias<sup>2</sup>



### Acción Extraordinaria de Protección

Sentencias derivadas de procesos constitucionales

#### Acción de Protección

| SENTENCIA                                               | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>1802-22-EP/26, voto concurrente y votos salvados</u> | <p>La Corte tuteló el derecho al debido proceso en la garantía de motivación en una sentencia que aceptó parcialmente una AP propuesta por otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa ni ambiental y con la falta de remediación de los daños ambientales en la provincia de Napo. En este caso, la Corte determinó que la Sala Provincial no respondió los argumentos relacionados con la presunta vulneración de los derechos a la consulta previa y ambiental. Aunque reconoció que estos derechos habían sido alegados y mencionó que los concesionarios mineros no habían sido demandados, expresamente señaló que no entraría a analizar dichas vulneraciones. La Corte consideró que estos argumentos eran relevantes, pues constituían uno de los fundamentos centrales de la AP y su resolución podía incidir directamente en la decisión sobre la existencia de una vulneración de derechos. En cambio, respecto de la sentencia de primera instancia, concluyó que la Unidad Judicial sí se pronunció sobre la consulta previa, la consulta ambiental y la soberanía alimentaria. Por tanto, la Corte declaró que la sentencia de la Sala Provincial vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y aceptó parcialmente la EP. El juez Jhoel Escudero Soliz, emitió un voto concurrente, pues consideró que correspondía declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación como bien lo determina la sentencia de mayoría, pero debido a que la Sala Provincial incumplió el criterio rector de suficiencia motivacional en garantías jurisdiccionales. La jueza Claudia Salgado Levy emitió un voto salvado, ya que consideró que: (i) la Sala Provincial sí ofreció una respuesta expresa a los argumentos relacionados con la consulta previa y ambiental; (ii) dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia compromete las medidas de protección dispuestas en ella y produce una afectación mayor que aquella que se pretende remediar, por lo que EP debía ser desestimada. De igual forma, la jueza Sandra Cordero Gárate y el juez Alí Lozada Prado emitieron un voto salvado en conjunto, ya que consideraron que el primer problema jurídico debió resolverse con el mismo criterio aplicado por el voto de mayoría en el segundo, pues allí sí se consideró suficiente la justificación de la Unidad Judicial.</p> |

<sup>2</sup> En este apartado se presentan las decisiones que aceptan total o parcialmente las acciones puestas en conocimiento de la Corte.

6-23-EP/26 y  
voto  
concurrente

La Corte tuteló el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento del trámite propio en un auto en el que el TDCA dictó mandamiento de ejecución y ordenó el pago de valores a favor del actor en el marco de la ejecución de una sentencia que aceptó la AP y dispuso únicamente retrotraer el sumario administrativo impugnado hasta el momento en que se produjo la vulneración declarada. La Corte comprobó que el Tribunal, ordenó un pago que no fue dispuesto en una sentencia constitucional, incurriendo en la violación a una regla de trámite. Aquello, implicó un socavamiento del derecho al debido proceso en la medida en que el Tribunal inició y resolvió un procedimiento de ejecución de reparación económica, en el que estableció un monto a pagar, sin que exista mérito para ello y sin que la entidad accionada cuente con un mecanismo de impugnación dentro del mismo proceso para cuestionar el auto impugnado. La Corte precisó que, aunque el Tribunal invocó la sentencia 109-11-IS para ordenar la reparación económica, en la sentencia 24-21-IS/24 este Organismo se apartó del precedente contenido en la sentencia 109-11-IS. En su voto concurrente, la jueza Alejandra Cárdenas Reyes señaló que la actuación del Tribunal debía valorarse a la luz del precedente vigente al momento de adoptar su decisión. Precisó que su error no consistió en desconocer una prohibición jurisprudencial posterior, sino en extender el precedente entonces vigente a un supuesto que no reunía sus elementos relevantes.

2643-23-  
EP/26 y votos  
salvados

La Corte tuteló el derecho al debido proceso en la garantía de observancia del trámite propio de cada procedimiento en un auto resolutorio expedido por el TDCA, donde se cuestionó la decisión de ordenar un monto de reparación económica sin que este provenga de una sentencia, auto o acuerdo reparatorio. Sobre el análisis de esta garantía, la Corte determinó que el TDCA no siguió la regla de trámite prevista en el artículo 19 de la LOGJCC aplicable al caso, en donde se establece que una resolución es válida cuando tiene la mayoría absoluta de los votos. En este sentido, la inobservancia de la regla de trámite trajo como consecuencia la afectación al derecho al debido proceso, en tanto se ejecutó una disposición no ordenada en una sentencia constitucional. En consecuencia, la Corte verificó que el TDCA, al sustanciar y disponer medidas de reparación económica que no habían sido ordenadas en la sentencia que resolvió la AP, un auto o resolución válida acorde a la configuración de votos de mayoría, o un acuerdo reparatorio vulneró la garantía analizada y aceptó la acción. El juez Jhoel Escudero Soliz emitió un voto salvado, en el que concluyó que, cuando una sentencia de AP declara la vulneración de derechos, pero no ordena expresamente una medida de reparación económica, como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, dicha medida no puede considerarse implícita ni puede exigirse en la fase de ejecución como ocurrió en el caso concreto.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>La jueza Alejandra Cárdenas Reyes emitió un voto salvado, en el que reconoce que, en el caso concreto, se presentó una irregularidad procesal que pudo derivar en la vulneración del derecho al debido proceso. Sin embargo, no advirtió un nexo entre tal posible vulneración y la actuación del TDCA. Por ello, consideró que no resulta admisible imputarla a la judicatura encargada de cuantificar la reparación económica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><u>3100-23-EP/26 y voto concurrente</u></p> | <p>La Corte tuteló el derecho a la seguridad jurídica en una sentencia de apelación emitida en el marco de una AP iniciada en contra de la Universidad de Guayaquil por un grupo de personas que reclamaron la terminación de sus contratos ocasionales celebrados con dicha institución. En su análisis, la Corte constató que los jueces de la Sala Provincial vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de la Universidad de Guayaquil al extender las medidas de reparación de la sentencia a favor de los amici curiae, lo cual conllevó a la desnaturalización de aquella figura. Esto, en concordancia con la línea jurisprudencial ya desarrollada por la Corte Constitucional en las sentencias 1812-20-EP/25, 1791-22-EP/25 y 813-22-EP/26. En este sentido, realizó una declaratoria jurisdiccional previa contra los jueces de la Sala Provincial que emitieron el voto de mayoría, por incurrir en error inexcusable. En su voto concurrente, el juez José Luis Terán Suárez señaló su discrepancia con la sentencia de mayoría, pues sostuvo que esa no distingue la posibilidad excepcional de que una persona, con independencia de su comparecencia, esté comprendida dentro una comunidad beneficiaria por efectos inter comunis, cuando cumpla los presupuestos constitucionales establecidos para su procedencia.</p> |

## **Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales**

| SENTENCIA                 | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>72-24-IS/26</u></p> | <p>La Corte aceptó la IS presentada para obtener el cumplimiento de una sentencia emitida en el marco de una AP en contra del GAD de Puerto López. La sentencia dispuso, entre otras medidas, la emisión de disculpas públicas y la reparación económica, consistente en que el GAD de Puerto López pague al actor que padecía una doble condición de vulnerabilidad, la diferencia del total de la indemnización establecida en el segundo inciso del artículo 8 del Mandato Constituyente 2 y se determine el monto a través del TDCAT. La Corte constató el incumplimiento de las medidas establecidas, por lo que dispuso que se ofrezca disculpas públicas al accionante, en las mismas condiciones de la sentencia, y que el GAD</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>de Puerto López cancele al accionante la reparación económica que fue cuantificada por el TDCAT. En consecuencia, la Corte ordenó realizar una investigación interna con el fin de determinar las causas del incumplimiento y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, así como, llamar la atención por la falta de cumplimiento de decisiones constitucionales de manera oportuna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>83-24-IS/26</u></p>  | <p>La Corte aceptó una IS presentada por la entidad obligada al cumplimiento de medidas, emitidas en el marco de una AP, entre las cuales se ordenó: el reintegro del accionante al cargo que desempeñaba en Petroecuador, y la cancelación de las remuneraciones dejadas de percibir más los beneficios de ley correspondientes al tiempo en el que ocurrió la separación. En primer lugar, la Corte verificó el cumplimiento de la medida de reintegro. No obstante, sobre la medida de reparación económica, la Corte constató que el juez ejecutor, al haber ordenado que Petroecuador homologue la remuneración de la accionante, se extralimitó de sus competencias puesto que ello no se ordenó en sentencia. En tal sentido, el cálculo para la reparación debía realizarse con base en la remuneración establecida en las sentencias de primera y segunda instancia, y no sobre la remuneración homologada, como ordenaba el juez ejecutor. Por lo tanto, el juez ejecutor realizó una modificación injustificada del alcance de la medida; y, en consecuencia, la Corte declaró que el juez ejecutor incurrió en la defectuosa ejecución de la sentencia. Como resultado, la Corte dejó sin efecto todas las decisiones relativas a la obligación de homologar las remuneraciones; declaró el cumplimiento de la medida de reintegro; y, dispuso que continúe el cálculo de la reparación económica con base en los parámetros establecidos en las sentencias.</p> |
| <p><u>154-24-IS/26</u></p> | <p>La Corte aceptó parcialmente la IS que perseguía el cumplimiento de una sentencia emitida en el marco de una AP interpuesta en contra del MSP, que dispuso el cambio de denominación del puesto laboral del accionante, el pago de la diferencia salarial entre la remuneración que percibía como auxiliar administrativo de salud y la que le correspondía como técnico de mantenimiento, y la publicación de disculpas públicas en la página web institucional. La Corte verificó el cumplimiento de dos de las medidas de reparación dispuestas, y el cumplimiento defectuoso por tardío de la segunda medida, relativa al pago de la reparación económica, pues si bien el MSP justificó haber pagado el monto de 39.556,48 dólares cuantificado por el TDCAT, no justificó el retardo de más de dos años desde la cuantificación de la reparación. En consecuencia, ordenó al MSP realizar una investigación interna para determinar responsabilidades y, de ser el caso, se imponga las sanciones correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

173-24-IS/26

La Corte aceptó parcialmente la IS que perseguía el cumplimiento de una sentencia emitida en el marco de una AP planteada en contra del IESS, SOLCA y el MSP, que ordenó la adquisición de un medicamento para una persona que padecía de una enfermedad catastrófica. La Corte verificó que la medida fue incumplida por las entidades obligadas. Consecuentemente, se llamó la atención al IESS y al MSP y se dispuso que inicien los procesos de investigación tendientes a determinar las responsabilidades de los servidores públicos que incurrieron en el incumplimiento de la sentencia, que emitan disculpas públicas y el pago de una reparación económica.

### III. Decisiones desestimatorias <sup>3</sup>

#### **IN** Acción de Inconstitucionalidad de Actos Normativos

| SENTENCIA                          | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>75-23-IN/26</u></a> | <p>La Corte desestimó la IN en contra del artículo 4 de la resolución 005-2023. Esta resolución reformó las tasas notariales reguladas a través de la Resolución 216-2017, que contiene el Reglamento del Sistema Notarial Integral de la Función Judicial. En cuestión previa, la Corte verificó que el artículo único de la resolución 056-2026, aprobada por el Pleno del CJ el 16 de abril de 2026, reformó de manera expresa la tabla de tasas notariales contenida en el artículo 4 de la resolución. Por lo tanto, la norma impugnada no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, le corresponde a la Corte Constitucional verificar los supuestos de unidad normativa o efecto ultractivos. Así, de la comparación entre ambas regulaciones la Corte verifica que el contenido de la disposición impugnada no fue reproducido en la nueva resolución, sino sustituido por un régimen distinto de cálculo de la participación estatal. En consecuencia, no se configura el supuesto de unidad normativa. Sobre el análisis de los efectos ultractivos, la Corte concluyó que la Resolución 056-2026 reemplazó la tabla de participación del Estado contenida en la disposición impugnada e incorporó una nueva regulación para el cálculo de las tasas notariales. Por tanto, la norma impugnada no surtió efectos ultractivos, motivo por el cual se vio impedida de formular un problema jurídico y pronunciarse sobre el fondo. En consecuencia, se desestimó la acción.</p> |
| <a href="#"><u>97-23-IN/26</u></a> | <p>La Corte desestimó una IN presentada por el fondo en contra del penúltimo inciso de la disposición transitoria segunda del Decreto Ejecutivo 1121 mediante el cual se dicta el Reglamento para la aplicación del Mandato Constituyente 8 que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas. El accionante alegó que esta disposición vulneraba el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el principio de progresividad y prohibición de regresividad, al establecer un régimen menos favorable que el aplicable a trabajadores contratados directamente. Luego del análisis correspondiente, la Corte desestimó la acción. Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, la Corte señaló que para determinar la existencia de un trato discriminatorio es necesario verificar, en primer lugar, que los sujetos comparados se encuentren en condiciones iguales o semejantes respecto del objeto y finalidad de la regulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>3</sup> En este apartado se presentan las decisiones que niegan o rechazan las acciones puestas en conocimiento de la Corte.

Solo si existe esta comparabilidad corresponde analizar la existencia de un trato diferenciado y determinar si este se encuentra justificado. Asimismo, respecto del principio de progresividad, la Corte precisó que la demanda debe aportar argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes que permitan identificar una disminución del nivel de protección de un derecho constitucional. La Corte determinó que los trabajadores intermediados, incorporados al sector público en virtud del Mandato Constituyente 8, no se encontraban en una situación jurídica comparable con aquellos contratados directamente, pues los primeros provenían de un régimen de intermediación laboral y fueron incorporados mediante un proceso transitorio y excepcional. Además, aclaró que el “año mínimo de garantía de estabilidad” no establece una contratación por un año, sino una protección especial frente a la terminación de la relación laboral durante ese período. Por tanto, no existía el presupuesto de comparabilidad necesario para establecer una vulneración a la igualdad. Respecto de la progresividad, consideró que el accionante no explicó cuál era el nivel de protección previamente alcanzado que habría sido reducido, por lo que su alegación planteaba, en realidad, una posible incompatibilidad con el Código del Trabajo y no una contradicción constitucional. En consecuencia, la Corte concluyó que la norma impugnada no vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación ni el principio de progresividad y prohibición de regresividad.



## Acción Extraordinaria de Protección

Sentencias derivadas de procesos constitucionales

### Acción de Protección

| SENTENCIA                            | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>1854-23-EP/26</u></a> | No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, en la sentencia de apelación que confirmó la sentencia de primera instancia y negó una AP presentada en contra del BCE y la PGE, por no haber devuelto las aportaciones individuales del Fondo de Seguro Adicional. La Corte señaló que la Sala realizó un examen expreso de los argumentos planteados por el accionante en su demanda y recurso de apelación, refiriéndose a la presunta vulneración de derechos por la no devolución de aportaciones del Fondo, para concluir que sí existió una devolución de aportaciones. Por lo tanto, la Corte concluyó que la Sala sí motivó suficientemente su decisión y el accionante sí recibió un pronunciamiento sobre sus argumentos, por lo que, no se configuró un vicio de incongruencia frente a las partes. |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>2218-23-EP/26</u></b></p>              | <p>No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes en los autos emitidos por el TCA que dispuso al perito la ampliación y reestructuración del informe y, aquel que fijó el monto de reparación económica basada en la reestructuración del informe, en el marco de la ejecución de una sentencia que aceptó la AP y dispuso el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. La Corte concluyó que, si bien el TCA aplicó criterios para cuantificar la reparación económica, no creó, reconoció, ni amplió las medidas de reparación integral ordenadas en la sentencia constitucional. Se limitó a disponer que el perito reestructure su informe, conforme al ordenamiento jurídico y a las circunstancias del caso, incluyendo la aplicación del artículo 46 de la LOSEP. Asimismo, la Corte encontró que, el TCA ejerció la competencia prevista en el artículo 19 de la LOGJCC y aplicó las reglas jurisprudenciales vigentes. Por ello, la fijación de criterios jurídicos para orientar la cuantificación de la reparación económica no constituyó una modificación de la sentencia, sino que fue, en el razonamiento del TCA, la consecuencia de aplicar al artículo 46 de la LOSEP. La Corte concluyó que la discrepancia del accionante con los criterios jurídicos del TCA y el monto dispuesto no implica una vulneración de la garantía de cumplimiento de normas y derechos de las partes.</p>                     |
| <p><b><u>20-24-EP/26 y voto salvado</u></b></p> | <p>No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, en el marco de una AP en la que se determinó, en segunda instancia, que la cesación de un nombramiento provisional sin concurso constituye un acto arbitrario y ordenó el reintegro de la accionante. La Corte consideró que, la medida de reparación integral de reintegrar al accionante sí contó con una justificación suficiente, pues la Corte Provincial explicó su relación con la desvinculación, con los daños ocasionados a la beneficiaria y con los derechos que declaró vulnerados. En consecuencia, la sentencia impugnada sí cumplió con satisfacer el estándar de suficiencia exigible respecto de las medidas de reparación ordenadas; por ello, descartó la vulneración del derecho al debido proceso y desestimó la EP. La jueza Claudia Salgado Levy emitió un voto salvado pues consideró que la Corte debió realizar un esfuerzo razonable para plantear un problema jurídico que permitiera examinar una vulneración del derecho a la seguridad jurídica derivada de la aceptación de una AP en un conflicto de índole laboral con una institución pública. En particular, la Corte debió analizar la procedencia de reparaciones económicas cuando la propia persona accionante acude tardíamente a la justicia constitucional y porque se omitió acceder a la vía contenciosa-administrativa para cuantificar estas medidas. Por estos motivos, la Corte debió aceptar la EP presentada.</p> |
| <p><b><u>101-24-EP/26</u></b></p>               | <p>No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, en el marco de un proceso de AP presentado por una persona que tenía padres con enfermedades catastróficas frente a la negativa del MINEDUC de su traslado administrativo hacia la ciudad donde estos residían.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>La Corte consideró que la Corte Provincial cumplió con el requisito de fundamentación normativa al momento de analizar la AP presentada por el accionante, pues precisó el contenido y alcance del derecho a la salud. La Corte también consideró cumplido el requisito de fundamentación fáctica pues el MINEDUC explicó que el concurso que el accionante ganó era en una ciudad determinada previamente y que la aceptación al mismo fue voluntaria. La Corte concluyó en que hubo suficiencia motivacional en la sentencia de apelación; por ello, descartó la vulneración del derecho al debido proceso y desestimó la EP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b><u>2738-24-EP/26</u></b><br/><b><u>y voto salvado</u></b></p> | <p>No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación en una sentencia de segunda instancia emitida en el marco de una AP iniciada en contra del GADM Las Lajas, por un particular que impugnó la terminación de su contrato de servicios ocasionales pese a haberle informado a la entidad que padecía de una enfermedad catastrófica. En el análisis la Corte verificó que los jueces de la Sala no incurrieron en un vicio de incongruencia frente a las partes, toda vez que sí respondieron las alegaciones relativas a i) el estado de salud del accionante, y ii) la necesidad de que se le garantizara la estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, desestimó la demanda. El juez Jhoel Escudero Soliz emitió un voto salvado, en el cual afirmó su discrepancia con el voto de mayoría, toda vez que, por un lado, consideró que se debió formular un problema jurídico respecto al cargo relativo a la vulneración de derechos, pues las judicaturas accionadas no habrían considerado el precedente jurisprudencial sobre la estabilidad laboral reforzada para trabajadores con una enfermedad catastrófica quienes tengan un contrato de servicios ocasionales, a través del derecho a la seguridad jurídica.</p> |

## Hábeas Data

| SENTENCIA                                                           | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>2080-23-EP/26</u></b><br/><b><u>y voto salvado</u></b></p> | <p>No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación, en la sentencia de apelación que confirmó la sentencia de primera instancia y negó un HD con medidas cautelares, presentada en contra de una persona particular por haber divulgado información de carácter personal de dos niñas en el marco de una valoración psicológica. La Corte señaló que la Sala identificó el documento y metadatos aportados por la accionante, valorando los mensajes de WhatsApp incorporados al proceso, concluyendo que estos elementos no permitían atribuir la legitimación pasiva con la difusión del documento. Por lo tanto, la Corte concluyó que la Sala si motivó suficientemente su decisión y sí recibió un pronunciamiento sobre sus argumentos, por lo que, no se configuró un vicio de incongruencia frente a las partes. El juez Jhoel Escudero Solíz, en su voto salvado, indicó que se debió haber formulado un problema jurídico para analizar el derecho a la tutela judicial efectiva en el componente de debida diligencia.</p> |

Además, consideró que, dada la gravedad del caso, relacionada con el manejo irresponsable de información íntima sobre la salud por parte de un profesional, correspondía declarar la vulneración de derechos y aceptar la acción de HD, disponiendo la eliminación de la información para evitar su difusión.



## Acción Extraordinaria de Protección

Sentencias derivadas de procesos ordinarios

### Penal

| SENTENCIA                            | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>2408-23-EP/26</u></a> | No se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación en la sentencia de apelación que confirmó la sentencia condenatoria emitida en el marco de un proceso contravencional penal por lesiones iniciado en contra de una particular. La Corte verificó que, dentro de la sentencia impugnada, la Sala Provincial sí respondió a los argumentos esgrimidos por la accionante, en particular sobre la presunta falta de proporcionalidad de la pena, al considerar que la sanción impuesta se encontraba dentro de los rangos previstos en el COIP y que se justificaba por la agravante correspondiente. En ese sentido, la Corte concluyó que la Sala Provincial no incurrió en un vicio de incongruencia frente a las partes. |



## Acción por Incumplimiento

| SENTENCIA                         | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>8-24-AN/26</u></a> | La Corte desestimó la AN presentada para solicitar al GADM de Pasaje el cumplimiento de la disposición transitoria primera del COESCOP. Tras su análisis, la Corte determinó que el GADM de Pasaje, a la fecha presente, dio cumplimiento a las obligaciones contenidas en la disposición, puesto que ha expedido la normativa prevista en la disposición transitoria primera del COESCOP, a saber, la Ordenanza del Cuerpo de Agentes de Control Municipal y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, instrumentos normativos que se encuentran vigentes y que regulan la estructuración y organización institucional del cuerpo de agentes de control municipal. Sin embargo, dirige un llamado de atención a la entidad por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones, dado que la normativa fue expedida una vez fenecido el plazo de 180 días previsto en el COESCOP. |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>25-24-AN/26</u></b> | <p>Desestimación de AN en la que se exigía el cumplimiento de dos oficios emitidos por el MIDENA y la PGE, tras verificar que el reclamo previo presentado no cumplió con los requisitos establecidos en el precedente de la sentencia 46-18-AN/22. En efecto, en la sentencia mencionada se señalaron los requisitos del reclamo previo: i) Estar dirigido a quien deba satisfacer el cumplimiento de la obligación; ii) Contener la identificación clara de las obligaciones (cuyo cumplimiento se exige; iii) Que dichas obligaciones identificadas sean las mismas que las invocadas en la acción por incumplimiento; y, iv) Solicitar el cumplimiento de manera expresa. Sobre el requisito 2, la Corte señaló que los accionantes no individualizaron la obligación cuyo cumplimiento exigían respecto de cada uno de estos oficios, ni justificaron de qué manera sus respectivos ámbitos personal y temporal resultarían aplicables a su situación. Por tanto, la Corte concluyó que, al no haber superado el segundo momento de la verificación del reclamo previo, no se configuró el requisito expuesto en el artículo 54 de la LOGJCC.</p> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **IS Acción de Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales**

| SENTENCIA                                     | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>34-23-IS/26</u></b>                     | <p>Desestimación de IS al verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas en una sentencia emitida en el marco de una AP iniciada en contra del MEF, el GAD de Montecristi y la PGE. La Corte identificó que la sentencia ordenó (i) el pago de remuneraciones y (ii) de los beneficios de ley correspondientes a los meses faltantes; así como (iii) que ofrezcan disculpas públicas y (iv) que informe al juez executor sobre el cumplimiento de esta última medida. Sobre esto, la Corte constató el cumplimiento integral de las medidas (i), (iii) y (iv); y, sobre el decisorio (ii), indicó que no se trataba de una medida, sino de un recordatorio al GAD de Montecristi sobre no descuidar sus obligaciones legales.</p> |
| <b><u>35-23-IS/26</u></b>                     | <p>Desestimación de IS pues el juez executor declaró el archivo de la causa tras verificar que las medidas fueron cumplidas integralmente, y sin que la accionante impugnara tal decisión. Asimismo, la Corte constató que la accionante no presentó argumentos relativos a un presunto acto ulterior que deba ser analizado. Por estas razones, dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>157-23-IS/26 y voto concurrente</u></b> | <p>Desestimación de IS al verificar que no existe contradicción entre dos sentencias que fueron emitidas en el marco de dos AP, ambas iniciadas en contra de la Universidad de Guayaquil. En el análisis, la Corte concluyó que no se configuraba una antinomia jurisdiccional dado que, por un lado, no existía identidad de sujetos ni hechos entre ambos procesos; y, por el otro, las medidas de ejecución ordenadas en ambas sentencias no eran incompatibles entre sí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>27-23-IS/26</u> | Desestimación de IS por inobservancia del primer requisito para presentación directa ante la Corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>98-24-IS/26</u> | Desestimación de IS al verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas en una sentencia emitida en el marco de una AP, que fue iniciada en contra de la Coordinación Zona 7 del MSP y la PGE. La Corte identificó que la sentencia ordenó (i) el cambio de régimen laboral que tenía el accionante con la entidad, es decir, del régimen de la LOSEP al Código de Trabajo; y, (ii) el pago de la reparación económica derivada del cambio de régimen laboral. Sobre ello, la Corte constató el cumplimiento integral de las medidas e identificó que, aun cuando el pago de la reparación económica no fue cumplido dentro del plazo determinado en la sentencia, sí consta en el expediente que las entidades realizaron todas las actuaciones encaminadas para el cumplimiento integral de la misma, por lo cual, no configura un cumplimiento defectuoso por tardío. |

## IV. Otras decisiones

### TI Tratado Internacional

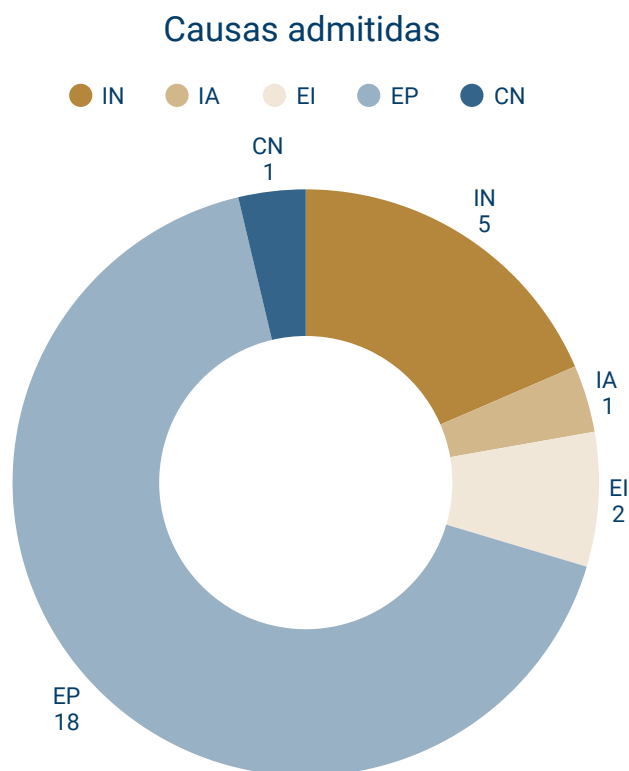
| SENTENCIA                         | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>4-26-TI/26</u></a> | El “Tratado de extradición entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República de Costa Rica”, requiere aprobación legislativa al inscribirse en lo contemplado en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución, por cuanto se refiere a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. |

# DECISIONES DE LA SALA DE ADMISIÓN

## Acciones presentadas ante la Corte Constitucional

La presente sección del boletín reporta las decisiones de las Salas de Admisión del 29 de junio y del 3 de julio de 2026.

En este apartado consta la totalidad de autos de admisión (27) y, algunos autos de inadmisión (21), en los que los tribunales han establecido un criterio de admisibilidad específico, que ejemplifica la forma en la que interpreta y aplican la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.



# ADMISIÓN

## IN Acción de Inconstitucionalidad de Actos Normativos

| AUTO                             | TEMA                                                                                                                                                                                                                                  | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>106-26-IN</u></a> | IN por el fondo en contra de la reforma a la Ordenanza que Regula las Actividades Productivas de Inversiones, de Infraestructura Turística y Habitacional en el cantón Isabela.                                                       | IN en contra de los artículos 1 y 2 de la reforma a la Ordenanza que Regula las Actividades Productivas de Inversiones, de Infraestructura Turística y Habitacional en el cantón Isabela aprobada por el Concejo Cantonal del GADM de Isabela. La IN fue presentada por el fondo. El Tribunal consideró que la demanda contiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes en torno a las normas constitucionales presuntamente vulneradas y verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOGJCC. En virtud de estas consideraciones, admitió la IN. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional, concluyó que no se proporcionaron los elementos suficientes para sustentar la petición, por lo que fue negada.                                                                        |
| <a href="#"><u>109-26-IN</u></a> | IN por el fondo en contra de los literales c y d, del numeral 1 del artículo 220 del COIP y contra los literales a, b, c y d, reformados por el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum. | IN en contra de los literales c y d, del numeral 1 del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal y subsidiariamente contra la estructura integral de los literales a, b, c y d, reformados por el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024. La IN fue presentada por el fondo. El Tribunal consideró que la demanda contiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes en torno a las normas constitucionales presuntamente vulneradas y verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOGJCC. En virtud de estas consideraciones, admitió la IN. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional, concluyó que no se proporcionaron los elementos suficientes para sustentar la petición, por lo que fue negada. |
| <a href="#"><u>115-26-IN</u></a> | IN por el fondo en contra de la                                                                                                                                                                                                       | IN en contra de la Ordenanza Municipal E-039-WEA y la Ordenanza Municipal E-100-WEA emitidas por el GADM de Santo Domingo, respectivamente publicadas en el Registro Oficial 37 de 14 de marzo de 2022 y en el Registro Oficial 1830 de 15 de octubre de 2024. La IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><b>Ordenanza Municipal E-039-WEA y la Ordenanza Municipal E-100-WEA.</b></p>                                                                       | <p>fue presentada por el fondo en contra de los artículos 2, 67 y la disposición transitoria quinta de la Ordenanza Municipal E-039-WEA; y, los artículos 1 inciso 1, 2 inciso 1, 3 inciso 1 y 4 de la Ordenanza Municipal E-100-WEA. El Tribunal consideró que la demanda contiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes en torno a las normas constitucionales presuntamente vulneradas y verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOGJCC. En virtud de estas consideraciones, admitió la IN. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional, concluyó que no se proporcionaron los elementos suficientes para sustentar la petición, por lo que fue negada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b><u>116-26-IN</u></b></p> | <p><b>IN en contra del Reglamento General de la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD.</b></p> | <p>IN en contra del Reglamento General a la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, publicado el 26 de mayo de 2026, en el cuarto suplemento del Registro Oficial 291. La IN fue presentada por la forma en contra de la totalidad de la ley, y por el fondo en contra de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de las disposiciones generales primera y segunda, y de la disposición transitoria primera del reglamento. El Tribunal consideró que la demanda contiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes en torno a las normas constitucionales presuntamente vulneradas, acumuló la causa al caso 25-26-IN y, verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOGJCC. En virtud de estas consideraciones, admitió la IN. En cuanto a la solicitud de suspensión provisional, concluyó que no se proporcionaron los elementos suficientes para sustentar la petición, por lo que fue negada.</p> |
| <p><b><u>118-26-IN</u></b></p> | <p><b>IN por el fondo en contra del artículo 308 del Código Tributario.</b></p>                                                                       | <p>IN en contra del artículo 308 del Código Tributario, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 38 de 14 de junio de 2026. La IN fue presentada por el fondo. El Tribunal consideró que la demanda presentada contiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes en torno a las normas constitucionales presuntamente vulneradas, y verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOGJCC. En virtud de estas consideraciones, admitió la demanda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## IA Acción de Inconstitucionalidad de Actos Administrativos con Efectos Generales

| AUTO                           | TEMA                                                                                                                                            | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>7-26-IA</u></a> | IA por el fondo en contra del Procedimiento para la regularización de personas extranjeras, padres de niños, niñas o adolescentes ecuatorianos. | IA por el fondo en contra de ciertas frases del acuerdo interministerial número 6 de 18 de marzo de 2020, a través del que se expidió el Procedimiento para la regularización de personas extranjeras, padres de niños, niñas o adolescentes ecuatorianos, que no han registrado su ingreso a través de los puntos de control migratorio oficiales. El Tribunal verificó el cumplimiento de los requisitos del artículo 79 de la LOGJCC. Además, consideró que el accionante cumple con la carga argumentativa mínima requerida, por lo que fue admitida. |

## CN Consulta de Norma

| AUTO                                          | TEMA                                                                                                                                                       | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>6-26-CN y voto salvado</u></a> | CN sobre la constitucionalidad de la Disposición General Sexta de la LOPGE y del inciso cuarto del artículo 3 de la resolución 15-2017 emitida por la CNJ. | CN presentada por el Tribunal Primero de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, en la cual solicitó a la Corte que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la Disposición General Sexta de la LOPGE y del inciso cuarto del artículo 3 de la Resolución 15-2017 emitida por el Pleno de la CNJ. El Tribunal verificó que la judicatura consultante identificó con claridad la norma sobre la cual se cuestiona su constitucionalidad y los principios o reglas constitucionales presuntamente infringidos; y, explicó las razones de relevancia procesal que tiene la norma consultada para la resolución del caso de origen. Por lo tanto, admitió la consulta y la acumuló a la causa 3-26-CN. La jueza Claudia Salgado Levy presentó un voto salvado. |

## EI Acción Extraordinaria de Protección contra decisiones de la Justicia Indígena

| AUTO                            | TEMA                                | RESUMEN                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>17-26-EI</u></a> | Argumentos claros sobre la presunta | EI en contra de la decisión emitida por el Consejo Interprovincial de Administración de Justicia Indígena del Pueblo Kichwa Saraguro que resolvió sobre un conflicto de adjudicación de un predio ubicado en el |

|                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>vulneración de derechos constitucionales en el marco de una resolución de justicia indígena.</b>                                     | cantón de Saraguro. Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales, pues no habría existido el quorum necesario para la instalación de la Asamblea de comuneros que tomó la decisión ni fueron escuchados por las autoridades indígenas de Saraguro. El Tribunal resolvió admitir la EI, pues existe la identificación de los derechos constitucionales que fueron presuntamente vulnerados y las razones específicas por las cuales se considera aquello.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>21-26-EI</u></b> | <b>Argumentos claros sobre la presunta vulneración de derechos constitucionales en el marco de una resolución de justicia indígena.</b> | El en contra de la resolución 002-CPK-2026 de 20 de marzo de 2026 emitida por la Asamblea General de la Confederación del Pueblo Kayambi, que declaró a los accionantes como responsables de la generación, ejecución y continuidad de la comercialización irregular de lotes de terreno. Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales pues este actuar anula sus derechos de propiedad y se configura una confiscación al dejar sin efecto los instrumentos jurídicos previos respecto a la propiedad. El Tribunal resolvió admitir la EI, pues existe la identificación de los derechos constitucionales que fueron presuntamente vulnerados y las razones específicas por las cuales se considera aquello. |



## **Acción Extraordinaria de Protección**

Causas derivadas de procesos constitucionales

| <b>AUTO</b>              | <b>TEMA</b>                                                                                                                                | <b>RESUMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>1056-26-EP</u></b> | <b>Potencial vulneración de derechos y posibilidad de corregir inobservancia de precedente de personas con enfermedades catastróficas.</b> | EP en contra de una sentencia de apelación que negó una AP, iniciada en contra de la Universidad de Guayaquil. La accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales, por cuanto la decisión impugnada no tomó en cuenta que padece de VIH, creando un requisito inexistente sobre la comunicación previa obligatoria al empleador. Además, la fundamentación se redujo en un análisis de legalidad administrativa sobre la duración de los contratos ocasionales. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto |

|                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                   | <p>que el caso permitiría corregir una posible violación grave de derechos de personas pertenecientes a un grupo de atención prioritaria por ser portadoras de enfermedades catastróficas. Así también, examinar una posible inobservancia de precedentes sobre estabilidad laboral reforzada, derecho a la intimidad y el conocimiento de la condición de salud de los empleados por parte del empleador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b><u>1086-26-EP</u></b></p> | <p><b>Possible manifiesta improcedencia sobre asuntos referentes a la terminación unilateral de contrato.</b></p> | <p>EP en contra de la sentencia de segunda instancia, que rechazó el recurso de apelación y ratificó la sentencia de primera instancia en una AP sobre un asunto referente a la terminación unilateral de contrato. El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales ya que la controversia central del caso es de origen contractual pública, debido a incumplimientos contractuales, lo cual, evidentemente se trata de un asunto infra constitucional. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso podría tratarse de manifiesta improcedencia de una AP por tratar asuntos referentes a la terminación unilateral del contrato, lo que contraviene los pronunciamientos de esta Corte.</p> |
| <p><b><u>1126-26-EP</u></b></p> | <p><b>Potencial vulneración a la seguridad jurídica por el conocimiento de una AP improcedente.</b></p>           | <p>EP en contra de una sentencia de apelación que aceptó una AP, iniciada en contra de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos 09D06-TARQUI 2 del Ministerio de Educación. La entidad accionante alegó la vulneración de sus derechos, ya que la decisión impugnada sustituyó a la jurisdicción contencioso-administrativa al revisar un acto administrativo disciplinario. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría corregir una grave vulneración a la seguridad jurídica relativa al posible conocimiento improcedente de una AP, cuya controversia debía ser resuelta por la justicia ordinaria.</p>                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1144-26-EP</u></b></p> | <p><b>Posible tutela de derechos al trabajo, a la vida digna y a la atención prioritaria vinculados a la estabilidad laboral reforzada de una persona sustituta.</b></p>                           | <p>EP en contra de la sentencia de segunda instancia que aceptó el recurso de apelación e inadmitió la AP sobre la desvinculación laboral de una persona sustituta. El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales, ya que desconoce precedentes constitucionales obligatorios que establecen la protección reforzada en materia laboral para personas con discapacidad y sus sustitutos. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso podría incidir en la garantía de los derechos al trabajo, a la vida digna y a la atención prioritaria, al identificar que el caso cumple con el criterio de gravedad, en tanto se relaciona con la presunta vulneración de derechos vinculados a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial de una persona que tendría bajo su cuidado a una hija con discapacidad.</p> |
| <p><b><u>1162-26-EP</u></b></p> | <p><b>Posibilidad de desarrollar criterios sobre la actuación de los jueces de garantías jurisdiccionales cuando la vulneración alegada corresponde a una garantía jurisdiccional distinta</b></p> | <p>EP en contra de una sentencia de apelación que negó una AP y su auto de aclaración y ampliación, iniciada en contra del comandante general de la Policía Nacional. Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales, ya que las decisiones impugnadas interpretaron que el HC era la vía exclusiva para conocer las vulneraciones derivadas de una detención ilegal y arbitraria, sin analizar las alegaciones sobre la vulneración de sus derechos. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría pronunciarse sobre la actuación que corresponde a los jueces de garantías jurisdiccionales cuando, al conocer una AP, consideran que las vulneraciones alegadas debieron ser reclamadas mediante una garantía jurisdiccional distinta.</p>                                                |
| <p><b><u>1164-26-EP</u></b></p> | <p><b>Posibilidad de corregir una grave vulneración de derechos</b></p>                                                                                                                            | <p>EP en contra de la sentencia emitida por la Corte Provincial, en la cual negó los recursos de apelación presentados y confirmó la decisión de aceptar la AP presentada en contra del MINEDUC y la PGE. La accionante alegó, entre otros argumentos, que sus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><b>de un niño quien, por una situación suscitada en su colegio, adquirió una discapacidad.</b></p>                                                                      | <p>derechos fueron vulnerados por los jueces de la Corte Provincial porque, mediante la sentencia impugnada resolvieron, sin una motivación suficiente, que la AP no era la vía idónea para disponer la reparación económica, pese a que declararon la vulneración de derechos de su hijo por conductas y omisiones atribuibles a la entidad accionada. A su criterio, ello también implicó la inaplicación del artículo 18 de la LOGJCC. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal consideró que el caso permitiría a la Corte solventar una grave vulneración de derechos que generó el retraso en la resolución de una causa donde quedó afectado un niño quien, dada una situación suscitada en su colegio, adquirió una discapacidad.</p>                                                                                               |
| <p><b><u>1197-26-EP</u></b></p> | <p><b>Posibilidad de corregir una grave vulneración de derecho a la defensa por una declaratoria de abandono que, presuntamente, no sería imputable al accionante.</b></p> | <p>EP en contra del auto emitido por la Sala Provincial mediante el cual declaró el abandono del recurso de apelación presentado en el marco de un proceso penal por el presunto delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. El accionante alegó la vulneración de sus derechos porque la Sala Provincial declaró el abandono de su recurso sin considerar que: (i) al estar privado de la libertad, su comparecencia dependía de que le garanticen un espacio para que pueda intervenir telemáticamente, lo que no ocurrió; (ii) la justificación presentada por su defensa técnica, cuya falta de comparecencia obedeció a una convocatoria previa de diligencias judiciales. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal consideró que el caso permitiría que la Corte conozca una grave vulneración de derechos procesales.</p> |
| <p><b><u>1214-26-EP</u></b></p> | <p><b>Potencial incumplimiento de precedentes jurisprudenciales y</b></p>                                                                                                  | <p>EP en contra de las sentencias de primera y segunda instancia que negó una AP, iniciada en contra de EP Petroecuador y la PGE. La accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales porque las judicaturas no consideraron su calidad de trabajadora sustituta e inobservaron el precedente de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p><b>potencial vulneración al derecho a la seguridad jurídica.</b></p>                            | <p>las sentencias 2091-21-EP/24 y 689-19-EP/20, así como a la resolución 01-2025 de la Corte Nacional de Justicia. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría solventar una grave vulneración de derechos de una persona trabajadora sustituta, así como, corregir una posible inobservancia de precedentes y ampliarlos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b><u>1322-26-EP</u></b></p> | <p><b>Potencial incumplimiento de la vía idónea respecto a grupos de atención prioritaria.</b></p> | <p>EP en contra de la sentencia de segunda instancia que negó la AP debido a la supuesta inexistencia de protección laboral reforzada del accionante relacionado al cuidado de su madre. El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales, ya que consideró que la Sala Provincial desconoció la protección reforzada que corresponde a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y a quienes ejercen funciones de cuidado. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto de la relevancia constitucional, el Tribunal consideró que el caso permitirá corregir la inobservancia de precedentes jurisprudenciales y posibles graves violaciones a derechos constitucionales, como el debido proceso en la garantía de la motivación, y la seguridad jurídica; así como verificar si la Sala Provincial justificó, de acuerdo con los parámetros constitucionales, la vía idónea ante circunstancias que involucren a grupos de atención prioritaria.</p> |
| <p><b><u>1323-26-EP</u></b></p> | <p><b>Potencial incumplimiento de precedentes jurisprudenciales de la Corte.</b></p>               | <p>EP en contra de la sentencia de apelación que aceptó una AP, iniciada en contra de EP Petroecuador. La entidad accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales ya que la Sala resolvió conflictos laborales cuya competencia le corresponde a la justicia ordinaria, inobservando el precedente de la sentencia 2038-23-EP/24. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                        | <p>acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría solventar una presunta inobservancia de la sentencia 2038-23-EP/24 y pronunciarse sobre la posible improcedencia de la AP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#"><u>1402-26-EP</u></a> | <p><b>Posibilidad de establecer un precedente sobre la imparcialidad judicial.</b></p> | <p>EP en contra de la sentencia de segunda instancia que aceptó una AP por medio de la cual se ordenó a la UNACH emitir un nuevo convenio de pago con un investigador que fue contratado en calidad de personal académico. La UNACH alegó la vulneración de sus derechos constitucionales ya que consideró que la Sala Provincial emitió una sentencia viciada por incoherencia lógica ya que el artículo 276 del COA prohíbe el otorgamiento de un segundo convenio de pago cuando el primero ha sido incumplido y que los jueces de la Sala no fueron imparciales. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal consideró que el caso permitirá revisar si existía una vía idónea distinta a la constitucional para conocer las pretensiones del legitimado activo y sentar un precedente sobre la imparcialidad judicial como una condición del Estado de Derecho.</p> |
| <a href="#"><u>1431-26-EP</u></a> | <p><b>Potencial incumplimiento de precedentes jurisprudenciales de la Corte.</b></p>   | <p>EP en contra de las sentencias de primera y segunda instancia que aceptaron una AP, iniciada en contra de EP Petroecuador. La entidad accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales ya que las judicaturas aceptaron una acción improcedente e inobservaron el precedente contenido en las sentencias 1679-12-EP/20, 1617-16-EP/21 y 1956-22-EP/25. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso trata sobre una manifiesta improcedencia, además, se podría identificar el posible incumplimiento de precedentes de este Organismo, así como la desnaturalización de una garantía.</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1521-26-EP</u></b></p>                                  | <p><b>Potencial vulneración de derechos por el conocimiento de una AP improcedente.</b></p>                                                                                                                      | <p>EP en contra de la sentencia de apelación que aceptó parcialmente una AP, iniciada en contra de la CGE. La entidad accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales porque la Sala reconoció una supuesta igualdad remunerativa entre servidores cuyas funciones y perfiles no son comparables. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría corregir una posible vulneración de derechos frente a un caso de manifiesta improcedencia de la AP, por el presunto desconocimiento de su objeto ante homologaciones salariales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b><u>1545-26-EP</u></b><br/><b><u>y voto salvado</u></b></p> | <p><b>Posibilidad de desarrollar jurisprudencia sobre protección laboral reforzada, tutela judicial efectiva y derechos de las personas trabajadoras sustitutas a cargo de una persona con discapacidad.</b></p> | <p>EP en contra de las sentencias de primera y segunda instancia que negaron una AP, iniciada en contra del GAD del cantón Eloy Alfaro. El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales porque las decisiones impugnadas inobservaron precedentes sobre la protección laboral reforzada de personas sustitutas y del conocimiento previo de la entidad empleadora, y, aplicaron la regla general prevista en la sentencia 2006-18-EP/24 sin examinar suficientemente si las circunstancias alegadas justificaban la intervención de la justicia constitucional. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal lo considera cumplido puesto que el caso permitiría examinar la protección laboral reforzada de quienes cuidan a personas con discapacidad y el valor de la acreditación administrativa y del conocimiento previo del empleador sobre dicha condición, así como la situación de trabajador sustituto y vulnerabilidad familiar. El juez Alí Lozada Prado presentó un voto salvado.</p> |



## Acción Extraordinaria de Protección

Causas derivadas de procesos ordinarios

| AUTO                     | TEMA                                                                                                                                                | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>736-26-EP</u></b>  | <b>Posibilidad de solventar una violación grave del derecho al acceso a la justicia por inadmisión de una demanda por formalismos irrazonables.</b> | EP en contra del auto emitido por la Unidad Judicial, mediante el cual se abstuvo de tramitar la causa y ordenó el archivo de la demanda por considerar que esta era manifiestamente inadmisibile, de la sentencia emitida por la Sala provincial, que negó el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la decisión recurrida y el auto que inadmitió el recurso de casación, en el marco de una demanda laboral. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso cumple con el requisito de relevancia constitucional pues, de ser ciertas las alegaciones del accionante, al inadmitir su demanda por formalismos irrazonables que habrían desconocido la dirimencia de competencia a favor de la justicia laboral, se habría impedido el acceso a la justicia a una persona que buscó la tutela de sus derechos en el 2012. |
| <b><u>1224-26-EP</u></b> | <b>Posibilidad de desarrollar criterios sobre delitos continuados y el principio de favorabilidad.</b>                                              | EP presentada en contra de las sentencias de primera instancia, segunda instancia y la de casación, en el marco de un proceso por el delito de usura. La accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales porque las judicaturas no realizaron un verdadero análisis del principio de favorabilidad y se limitaron a aplicar la Resolución No. 001-2017 de la CNJ para considerar el delito como continuado y justificar la aplicación del COIP. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto de la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso permitiría analizar si la vigencia del COIP y el criterio de un delito continuado transgreden la garantía de motivación y el principio de favorabilidad, en relación con la sentencia 367-18-EP/23.                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1442-26-EP</u></b></p> | <p><b>Posibilidad de establecer un precedente sobre el alcance de la garantía de la motivación en las sentencias emitidas por la CNJ cuando casa una decisión.</b></p> | <p>EP en contra de la sentencia de casación, que casó la sentencia de segunda instancia que ordenaba al SRI devolver valores por concepto de un crédito tributario a una compañía, en el marco de un proceso contencioso administrativo. El accionante alegó la vulneración de sus derechos constitucionales, ya que la CNJ no habría emitido una sentencia de mérito sobre el fondo de la controversia. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso podría permitir un precedente judicial sobre el alcance de la garantía de la motivación en las sentencias emitidas por la CNJ cuando resuelve casar una decisión y, posteriormente, adopta un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En particular, el conocimiento del caso podría contribuir a precisar la fundamentación exigible en esta clase de decisiones y la relación que debe existir entre las razones que sustentan la casación y aquellas que justifican la resolución definitiva de las pretensiones sometidas a conocimiento judicial.</p> |
| <p><b><u>1494-26-EP</u></b></p> | <p><b>Potencial vulneración de derechos e inobservancia de precedentes sobre el abandono en procesos penales por problemas técnicos en la conexión telemática.</b></p> | <p>EP presentada en contra del auto de abandono en el marco de un proceso por el delito de homicidio. La accionante alegó la vulneración de sus derechos porque la CNJ no revisó si existía una real voluntad de abandono o si la desconexión de la audiencia se trataba de un incidente técnico. El Tribunal consideró que la demanda presenta argumentos claros y completos sobre las vulneraciones alegadas, y verificó que la acción no incurre en las causales de inadmisión previstas en la LOGJCC. Respecto a la relevancia constitucional, el Tribunal evidenció que el caso permitiría resolver una posible vulneración de derechos y el incumplimiento de precedentes respecto a la declaratoria de abandono en procesos penales debido a problemas técnicos en la conexión telemática.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# INADMISIÓN



## Acción de Inconstitucionalidad de Actos Normativos

| AUTO                                               | TEMA                                                                                     | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>8-26-IN</u></a>                     | Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes. | IN por el fondo, en contra de frases específicas del artículo 4 del COESCOP, y de los artículos 1, 2.5 literales a), b) y c), y del 8 al 58 de la misma ley, por tratarse de normas conexas a las frases impugnadas. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos o pertinentes, pues el accionante no esgrime razones concretas y directas por las cuales se impugne la norma, o por qué son incompatibles con la Constitución, sino que se limita a cuestionar la manera en las que dichas normas han sido aplicadas e interpretadas por las autoridades judiciales y las administrativas. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por tal motivo, tampoco proceden las medidas cautelares solicitadas. |
| <a href="#"><u>35-26-IN y voto concurrente</u></a> | Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes. | IN por la forma y por el fondo en contra de la resolución SENAE-SENAE- 2026-0006-RE, emitida por el Servicio Nacional de Aduana del 24 de enero de 2026. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el cargo de los accionantes cuestiona el diseño normativo de la resolución impugnada. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas. La jueza Alejandra Cárdenas Reyes emitió un voto concurrente.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <a href="#"><u>63-26-IN</u></a>                    | Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes. | IN por el fondo en contra de los artículos 13 y 14 de la Resolución GADDMQ-DMTH-2025-00001-R, expedida el 02 de febrero de 2025 por la Dirección Metropolitana de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito. El Tribunal verificó que la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                        | <p>demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el cargo de los accionantes cuestiona el diseño normativo de la resolución impugnada. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>112-26-IN</u></b>                | <p><b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b></p> | <p>IN por el fondo, en contra de los artículos 23 y 24 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria para las y los Servidores de la Función Judicial, expedido por el Consejo de la Judicatura. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el accionante agota sus argumentos en la inconformidad respecto de los supuestos de aplicación de las normas impugnadas y la eventual interpretación que, a su juicio, realizan los órganos disciplinarios del CJ. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas.</p>       |
| <b><u>117-26-IN y voto salvado</u></b> | <p><b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b></p> | <p>IN por el fondo en contra de la circular NAC-DGECCGC26-00000004 emitida el 31 de marzo de 2026 por la directora general del Servicio de Rentas Internas. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el accionante no esgrime razones concretas y directas por las que se impugne la norma y solo se limita únicamente a señalar una presunta incompatibilidad con la Constitución e instrumentos internacionales de manera general. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas. El juez Alí Lozada Prado emitió voto salvado.</p> |
| <b><u>122-26-IN</u></b>                | <p><b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b></p> | <p>IN por el fondo en contra del artículo 1 de la Resolución 714-17-06-2011, emitida el 17 de junio de 2011 por el pleno del TCE y publicada en el Registro Oficial 493 el 18 de julio de 2011. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el cargo del accionante se sustenta en una controversia entre normas infraconstitucionales y en la inconformidad de la accionante con la forma en que esta se articula.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                           | <p>Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>123-26-IN</u></b> | <p><b>Inadmisión de una IN por cosa juzgada sobre la constitucionalidad del artículo 42 de la Ley de Inquilinato.</b></p> | <p>IN por el fondo en contra del segundo inciso del artículo 42 de la Ley de Inquilinato, publicada en el Registro Oficial 196 de 1 de noviembre de 2000. El Tribunal verificó que la demanda incurre en la causal de rechazo prevista en el artículo 84 numeral 4, de la LOGJCC, por recaer sobre una norma jurídica amparada por decisiones previas de esta Corte con efectos de cosa juzgada, ya la Corte se pronunció de manera expresa y vinculante sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 42 de la Ley de Inquilinato, en la sentencia 007-15-SCN-CC, respecto de los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía de recurrir.</p>              |
| <b><u>125-26-IN</u></b> | <p><b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b></p>                    | <p>IN por la forma y fondo, en contra de la integralidad del Decreto Ejecutivo 424 dictado por el presidente de la República, publicado en el Quinto Suplemento del Registro Oficial 309 de 19 de junio de 2026. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el accionante expresa una inconformidad general respecto de lo que, a su juicio, resultaría la inconveniencia de implementar el Decreto Ejecutivo 424, pero no se satisface la carga argumentativa exigida. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas.</p> |
| <b><u>126-26-IN</u></b> | <p><b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b></p>                    | <p>IN por la forma y fondo, en contra de la integralidad del Decreto Ejecutivo 431 dictado por el presidente de la República, publicado el 25 de junio de 2026. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el accionante expresa una inconformidad general con la decisión de declarar un feriado no recuperable, pues cuestiona sus efectos sobre la actividad económica y los ingresos de trabajadores autónomos e informales, pero no se satisface la carga argumentativa exigida. Por lo tanto, concluyó</p>                                                                                                                                      |

|                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                         | que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>133-26-IN</u></b> | <b>Inadmisión de una IN por falta de argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes.</b>         | IN por la forma y fondo, en contra de la integralidad del Decreto Ejecutivo 424 dictado por el presidente de la República, publicado en el Quinto Suplemento del Registro Oficial 309 de 19 de junio de 2026. El Tribunal verificó que la demanda no contiene argumentos claros, ciertos, específicos, pues el accionante cuestiona la conveniencia de implementar mecanismos -que a su parecer- contrarían el resultado del pronunciamiento popular, sin demostrar una incompatibilidad normativa entre el Decreto Ejecutivo 424 y la Constitución. Por lo tanto, concluyó que la demanda no cumple con los requisitos de admisión, por lo que inadmitió la IN. Por lo mismo, no proceden las medidas cautelares solicitadas. |
| <b><u>140-25-IN</u></b> | <b>Inadmisión de una IN por existir cosa juzgada constitucional respecto del Decreto Ejecutivo 153.</b> | IN por la forma y fondo en contra del Decreto Ejecutivo 153 emitido por el presidente de la República el 20 de septiembre de 2025. El Tribunal consideró que en la sentencia 130-25-IN/25, la Corte constató la unidad normativa entre los decretos 148, 152 y 153 y desestimó su inconstitucionalidad, señalando además que los dictámenes de la causa 11-25-RC tienen fuerza vinculante y efectos erga omnes. Por tal concluyó que existe cosa juzgada constitucional respecto del Decreto 153 y que la demanda incurre en la causal de rechazo del artículo 84 numeral 4 de la LOGJCC. Por lo mismo, tampoco proceden las medidas cautelares solicitadas.                                                                   |

## **AN** Acción por incumplimiento

| AUTO                   | TEMA                                         | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>19-26-AN</u></b> | <b>Inadmisión de AN por falta de objeto.</b> | AN en contra de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a fin de que cumplan con una sentencia de apelación en el marco de una acción de hábeas data. El Tribunal verificó que la pretensión no es |

|                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                     | objeto de una AN en virtud de que se pretende verificar el cumplimiento de una sentencia emitida en un proceso de hábeas data. Por tanto, inadmitió la AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>20-26-AN</u></b> | <b>Inadmisión de una AN por existencia de otra vía.</b>                                             | AN en contra de la Contraloría General del Estado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la Procuraduría General del Estado, reclamando el cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley de Seguridad Social de la PNE, publicada el 01 de junio de 1995 y del informe final de liquidación de cuentas de la Ex Caja Militar - Sección PP.NN. de 9 de junio de 1998, emitido por la comisión técnica interinstitucional referida en aquella disposición legal. El Tribunal determinó que la pretensión de la parte accionante es ajena a la naturaleza y objeto de la acción constitucional por incumplimiento, toda vez que este mecanismo no persigue la ejecución de obligaciones dinerarias en disputa como la de este caso. Por tanto, concluyó que la demanda incurre en la causal de inadmisión prevista en el numeral 3 del artículo 56 de la LOGJCC. |
| <b><u>23-26-AN</u></b> | <b>Inadmisión de AN por falta de objeto.</b>                                                        | AN en contra del GADM de Balzar, en la cual solicitó el “cumplimiento de la sentencia judicial que quedó ejecutoriada desde el 22 de noviembre de 2019” dentro del proceso por daños y perjuicios 09320-2018-00442. El Tribunal observó que el accionante exigió el cumplimiento de una decisión emitida dentro de un proceso por daños y perjuicios. El Tribunal señaló que la referida decisión no es una norma ni una sentencia o informe emitido por un organismo internacional de derechos humanos, por lo que no es objeto de la AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>24-26-AN</u></b> | <b>Inadmisión por existir otra garantía jurisdiccional para proteger derechos constitucionales.</b> | AN en contra de la Comandancia General de la PNE, solicitando el cumplimiento del artículo 112.1 del COESCOP y los artículos 440 y 441 del Reglamento de Carrera Profesional de la PNE. El Tribunal señaló que la pretensión del accionante es la reincorporación al servicio activo de la policía y obtener una reparación integral, por lo que consideró que la misma es ajena a la naturaleza jurídica de la AN, al pretender la protección de sus derechos constitucionales, mismos que podían ser solventados por otra vía. Por tanto, inadmitió la AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>27-26-AN</u></b> | <b>Inadmisión por falta del reclamo previo.</b> | AN en contra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano y de EP Petroecuador, solicitando el cumplimiento del artículo 1 del Mandato Constituyente 8 y del artículo 1 de su Reglamento, que suprime la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por horas. El Tribunal señaló que el reclamo previo no guardó correspondencia íntegra con la AN, ya que no fue dirigido a la autoridad competente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano ni identificó o solicitó expresamente el cumplimiento del artículo 1 del Mandato Constituyente 8. |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CN

## Consulta de norma

| AUTO                  | TEMA                                                          | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>7-26-CN</u></b> | <b>Inadmisión de una CN por incumplimiento de requisitos.</b> | CN presentada por el juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca respecto del inciso segundo del artículo 56 de la LOD, en el marco de una demanda laboral. El Tribunal observó que el juez pretende que la Corte se pronuncie respecto a un conflicto de aplicación de una norma infraconstitucional y resuelva el caso que está en su conocimiento, partiendo de un supuesto hipotético de que las partes no quisieran retomar una relación laboral. Por tanto, inadmitió la CN.                                                                 |
| <b><u>8-26-CN</u></b> | <b>Inadmisión de una CN por incumplimiento de requisitos.</b> | CN presentada por la Unidad Judicial del Cantón el Carmen sobre la compatibilidad de los artículos 372, 392 y 413 del COGEP con la Constitución y con los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Tribunal observó que, aunque la judicatura enunció derechos y disposiciones constitucionales, no construyó una duda razonable y motivada sobre la incompatibilidad de los artículos 372, 392 y 413 del COGEP con la Constitución. En consecuencia, no se cumplió con el segundo requisito de admisibilidad por lo que, inadmitió la CN. |

**IO**

## Acción de Inconstitucionalidad por Omisión

| AUTO                  | TEMA                                                                                                                                             | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>2-26-IO</u></b> | <b>Inadmisión de la IO por no contener argumentos claros, ciertos y específicos respecto a la presunta omisión de un mandato constitucional.</b> | IO presentada por omisión absoluta respecto del Reglamento General a la LODEFER, expedido mediante Decreto Ejecutivo 422, publicado en el Quinto Registro Oficial Suplemento 305 de 15 de junio de 2026. El accionante sostuvo la omisión del Reglamento en cuanto al desarrollo del contenido de los artículos 591 y 602 de la LODEFER, que reconocería a los profesionales del deporte los derechos a la libertad de asociación, la capacitación continua, el ejercicio profesional libre de discriminación. El Tribunal consideró que la demanda no presenta argumentos claros, ciertos, específicos y pertinentes que identifiquen un mandato constitucional claro y concreto exigible mediante acción de inconstitucionalidad por omisión. Por tanto, inadmitió la IO. |

**EP**

## Acción Extraordinaria de Protección

Objeto (Art. 58 de la LOGJCC). Sentencias, Autos Definitivos, Resoluciones con Fuerza de Sentencia

| AUTO                     | TEMA                                                                                  | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>1033-26-EP</u></b> | <b>El auto que declara sin lugar la demanda por incompetencia no es objeto de EP.</b> | EP en contra del auto emitido por la Sala Nacional que declaró sin lugar la demanda por incompetencia, al considerar que la acción propuesta no es una acción objetiva, en el marco de un proceso de impugnación contra la circular emitida por el SRI. El Tribunal determinó que la decisión no es objeto de EP, puesto que la Sala no emitió un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones con fuerza de cosa juzgada material. Además, dicha decisión no constituye un impedimento para el inicio de un nuevo proceso ligado a las mismas pretensiones, pues su análisis se limitó exclusivamente a la inadmisión de la demanda por falta de competencia. Tampoco se evidenció que la decisión impugnada, prima facie, sea susceptible de causar un gravamen irreparable, tomando en cuenta que las pretensiones de la compañía accionante podrían ser sometidas al conocimiento de la autoridad judicial competente. |



## Acción Extraordinaria de Protección

Oportunidad (Art. 60 de la LOGJCC)

| AUTO                    | TEMA                                                                                                                                                 | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>992-26-EP</u></b> | <b>Inadmisión de EP por falta de oportunidad. / La mera alegación de falta de notificación no justifica la interposición extemporánea de una EP.</b> | EP en contra de las sentencias de primera y de segunda instancia, así como la sentencia en etapa de casación, emitidas en el marco de un proceso penal por el presunto delito de femicidio. La accionante, en calidad de autoridad indígena electa por la asamblea comunitaria por ser la presidenta de la comuna de “El Topo”, de la parroquia de San Pablo del Lago, Otavalo, alegó que la comuna nunca fue notificada, ni con las audiencias ni las sentencias emitidas en ambas instancias y en casación, en el proceso penal llevado a cabo contra el “compañero” (el sentenciado), a fin de justificar la presentación de la EP después de los veinte días término otorgados por la ley. El Tribunal determinó que, según los antecedentes, la comuna accionante intervino durante cada etapa del proceso penal, e incluso señaló el correo electrónico de la presidente de la comuna para las notificaciones. Por este motivo, el Tribunal concluyó que la EP fue interpuesta de manera excesiva sobre el término previsto en los artículos 60, 61 numeral 2 y 62 numeral 3 de la LOGJCC y la inadmitió. |

# DECISIONES DE LA SALA DE SELECCIÓN

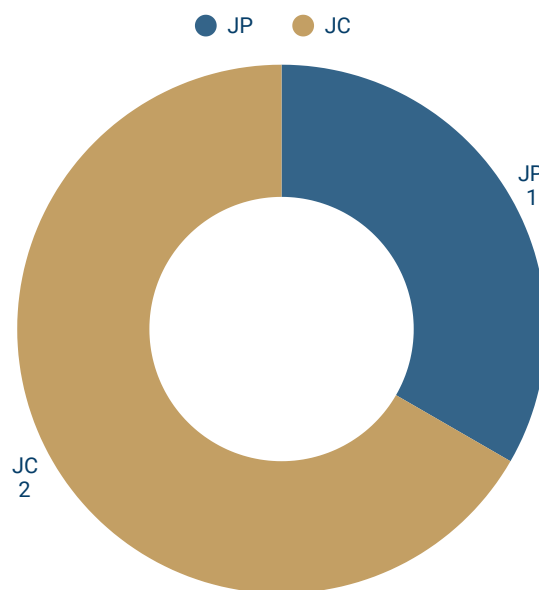
## Casos seleccionados por su relevancia constitucional

Las juezas y jueces a nivel nacional deben enviar todas las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional.

A su vez, este Organismo ejerce su atribución de seleccionar casos de forma discrecional, tomando en consideración los parámetros establecidos en el art. 25, numeral 4 de la LOGJCC. Estos son: gravedad, novedad, negación o cambio de los precedentes judiciales fijados por la Corte Constitucional, relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia.

El 5 de agosto de 2026, la Sala seleccionó 3 casos para el desarrollo de jurisprudencia vinculante, la cual será de cumplimiento obligatorio para todo el Ecuador y servirá para el ejercicio y goce de los derechos constitucionales de sus habitantes.

Decisiones constitucionales de  
instancia (sentencias)



## JP Jurisprudencia Vinculante de Acción de Protección

| CASO             | TEMA                                                                                                  | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>431-25-JP</u> | <b>Desnaturalización de la AP al haber sido aceptada para el cumplimiento de un contrato público.</b> | AP presentada por el Consorcio Vial Esmeraldas para exigir el pago de más de un millón de dólares adeudados por la Empresa Pública de Tránsito de Esmeraldas, derivados de un contrato público. La Unidad Judicial aceptó la acción al considerar que la retención de los valores vulneró los derechos a la propiedad y a la seguridad jurídica, aunque descartó la afectación al derecho al trabajo y remitió la determinación de daños a la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala de Selección de la Corte Constitucional seleccionó el caso por cumplir con el criterio de gravedad, debido a que se habría aceptado una AP manifiestamente improcedente o desnaturalizada, al referirse al pago de obligaciones pendientes de contratos públicos. |

## JC Jurisprudencia Vinculante de Medidas Cautelares

| CASO            | TEMA                                                                                                                                                        | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>2-25-JC</u>  | <b>Manifiesta improcedencia o desnaturalización de medida cautelar para asegurar el abastecimiento mensual de gasolina a una cooperativa de transporte.</b> | Solicitud de medidas cautelares presentada por la Cooperativa de Transporte Reina del Camino para impugnar un acto administrativo de abastecimiento de combustible. La Unidad Judicial aceptó la solicitud de medidas cautelares al considerar que los derechos al trabajo y a la economía de la cooperativa se encontraban en amenaza de vulneración, pues el acto administrativo impugnado generaría desabastecimiento y afectaciones económicas. Las medidas cautelares fueron posteriormente revocadas. La Sala de Selección de la Corte Constitucional seleccionó el caso por cumplir con el criterio de gravedad y novedad, debido a que existiría una posible improcedencia manifiesta o desnaturalizante de las medidas cautelares autónomas, al haberse presentado para resolver un asunto que no tenía relación directa con derechos constitucionales. |
| <u>61-25-JC</u> | <b>Desnaturalización de la AP para</b>                                                                                                                      | Solicitud de medidas cautelares presentada por una abogada a favor de Zenón Leonidas Coloma Estrada,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**exigir la  
ejecución del  
pago de una  
reparación  
económica  
dispuesta en una  
AP previa.**

en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sucumbíos (GAD). La accionante manifestó que, hace más de un año, mediante una AP presentada por Saúl Ricardo Andy Cerda, en calidad de procurador judicial de varios policías municipales — entre ellos, Zenón Leonidas Coloma Estrada—, se declaró la vulneración de derechos constitucionales y se dispuso, como medida de reparación, que el GAD pague la suma de USD 1 311 881,98 por concepto de horas suplementarias, extraordinarias y trabajo nocturno. La accionante alegó la existencia de una amenaza inminente de vulneración de derechos constitucionales, no solo respecto de Zenón Leonidas Coloma Estrada, sino también de los demás beneficiarios, varios de los cuales pertenecen a grupos de atención prioritaria, tales como personas adultas mayores y personas con discapacidad. La Unidad Judicial Especializada aceptó las medidas cautelares y dispuso el pago de la reparación económica ordenada en la AP.

La Sala de Selección de la Corte Constitucional seleccionó el caso por cumplir con el criterio de gravedad ante una posible desnaturalización de las medidas cautelares autónomas al haber sido utilizadas para exigir la ejecución del pago de una reparación económica; y, novedad debido a que esta Corte no ha desarrollado, a través de su jurisprudencia, criterios sobre la improcedencia de las medidas cautelares autónomas en circunstancias como las del presente caso.

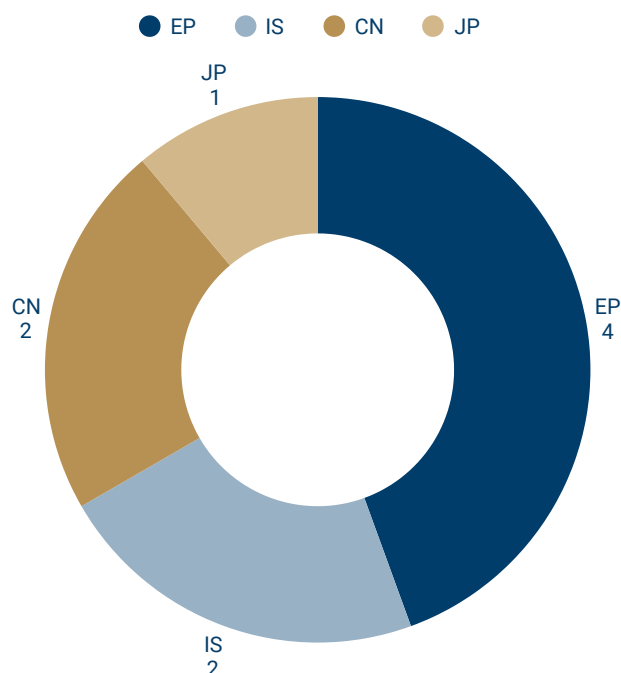
# SEGUIMIENTO DE SENTENCIAS Y DICTÁMENES

## Casos de seguimiento

La fase de seguimiento se activa respecto a sentencias, dictámenes o acuerdos reparatorios emitidos por la Corte, con el fin de que sean ejecutadas integralmente, lo que hace posible una tutela judicial efectiva de los derechos.

El boletín de seguimiento reporta **los autos de verificación del cumplimiento de las decisiones constitucionales aprobados por el Pleno** de la Corte Constitucional y notificados durante el **mes de agosto de 2026**.

Autos de verificación del cumplimiento de sentencias y dictámenes



# I. Decisiones relevantes



**Destacadas**



## Consulta de Norma

**Auto** [0011-18-CN/26](#)

### Matrimonio igualitario

En fase de seguimiento la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 11-18-CN/19.

Esta causa se originó por una consulta de norma elevada por la Corte Provincial de Pichincha dentro de una AP, presentada contra el Registro Civil por haber negado a una pareja del mismo sexo la celebración e inscripción de su matrimonio. La consulta buscaba determinar si la OC-24/17 de la Corte IDH —que reconoce el matrimonio igualitario— es de aplicación directa en Ecuador, sin necesidad de reformar previamente la Constitución ni la ley. Al absolverla, la Corte determinó que el texto constitucional y el convencional son complementarios y no contradictorios, reconociendo que el bloque de constitucionalidad ecuatoriano ampara tanto el matrimonio entre un hombre y una mujer como entre parejas del mismo sexo.

En este auto la Corte determinó que el tribunal consultante resolvió el recurso de apelación conforme a la interpretación del sistema normativo a la luz de la sentencia 11-18-CN/19 y que el Registro Civil cumplió con solemnizar, autorizar, inscribir y registrar el matrimonio de la pareja. En consecuencia, al haberse verificado el cumplimiento de las medidas ordenadas, la Corte dispuso el archivo de la causa.

## II. Autos de seguimiento

### EP Acción Extraordinaria de Protección

| CASO                                 | TEMA                                                                                                              | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#"><u>2014-12-EP/26</u></a> | <b>Verificación de cumplimiento de atención integral de salud / provisión de medicamentos / informes anuales.</b> | En fase de seguimiento, la Corte verificó el cumplimiento de la sentencia 016-16-SEP-CC, en la que aceptó una acción extraordinaria de protección originada por la desvinculación del accionante de la PNE, sin considerar que es una persona que vive con VIH, y ordenó medidas de reparación integral. En este auto, la Corte constató que el accionante y su madre reciben atención médica y psicológica, y que al accionante se le proveen los medicamentos necesarios. En consecuencia, declaró que la medida de atención integral de salud se encuentra en proceso de cumplimiento y determinó que no requiere ser modificada. Asimismo, ordenó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional continuar con la prestación de los servicios de salud e informar anualmente a la Corte sobre su cumplimiento. |
| <a href="#"><u>817-21-EP/26</u></a>  | <b>Archivo por verificación de cumplimiento de la medida de registro de llamado de atención.</b>                  | En fase de seguimiento la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 817-21-EP/24 en la que aceptó parcialmente la acción, declaró la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de recurrir del accionante, dejó sin efecto la ejecutoria de la decisión impugnada y abrió el término para la interposición del recurso de apelación. En este auto, la Corte determinó que el CJ cumplió con el registro de llamado de atención al juez de origen por haber vulnerado la garantía de recurrir del accionante. En consecuencia, al haberse verificado el cumplimiento de las medidas ordenadas, la Corte dispuso el archivo de la causa.                                                                                                                                              |
| <a href="#"><u>1688-14-EP/26</u></a> | <b>Archivo por verificación de cumplimiento</b>                                                                   | En fase de seguimiento, la Corte verificó el cumplimiento de la sentencia 1688-14-EP/20, en la que aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección y declaró vulnerados los derechos a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>de medidas de tramitación del proceso y de informar a la Corte.</b>                                   | la tutela judicial efectiva y a la defensa de la accionante, dentro de un juicio de prescripción adquisitiva de dominio, por lo que dispuso medidas de reparación. En este auto, la Corte determinó que el CJ cumplió integralmente con las medidas relativas a la tramitación de la sanción de destitución y a la difusión del auto de verificación, así como con la obligación de informar sobre su ejecución.                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>3269-18-EP/26</u></b> | <b>Archivo por cumplimiento de la medida de emitir una nueva decisión sobre el recurso de apelación.</b> | En fase de seguimiento, la Corte verificó el cumplimiento de la sentencia 3269-18-EP/23, en la que aceptó la acción extraordinaria de protección y declaró que la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Manabí vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. En este auto, la Corte constató que se realizó el sorteo correspondiente y que una nueva conformación de la Sala Provincial resolvió el recurso de apelación del accionante. En consecuencia, declaró cumplida la medida y, al no existir otras pendientes de ejecución, dispuso el archivo de la causa. |

## **IS Incumplimiento de Sentencias y Dictámenes**

| CASO                        | TEMA                                                                                                                             | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>0047-14-IS/26</u></b> | <b>Archivo por verificación de cumplimiento de la medida de reparación económica por equidad y de la obligación de informar.</b> | En fase de seguimiento, la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 014-17-SIS-CC, en la que estableció que la Universidad de Guayaquil incurrió en el incumplimiento parcial respecto de la negativa de los derechos políticos y económicos conferidos por la ley a los profesores principales, conforme a lo ordenado en la sentencia emitida el 30 de mayo de 2011. Adicionalmente, ante la imposibilidad fáctica de reconocer a dos beneficiarios el estatus jurídico correspondiente a un profesor principal, la Corte dispuso, como medida equivalente, el pago en equidad, así como la obligación de informar sobre su cumplimiento. En este auto, la Corte verificó que ambos pagos fueron efectuados; sin embargo, determinó que se realizaron fuera de los plazos establecidos. Asimismo, constató que la Universidad informó tardíamente sobre su ejecución. En consecuencia, al no existir medidas pendientes de ejecución, ordenó el archivo. |

|                    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>33-09-IS/26</b> | <b>Archivo por verificación de cumplimiento de las medidas de determinación y pago de intereses y llamados de atención.</b> | <p>En fase de seguimiento, la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 029-17-SIS-CC, en la que aceptó una acción de incumplimiento relacionada con una resolución de amparo constitucional favorable a una persona que había ganado un concurso de méritos y oposición para ocupar un cargo en la APG. Ante el tiempo transcurrido, la Corte dispuso como reparación el pago de las remuneraciones, beneficios sociales y aportes a la seguridad social dejados de percibir por el accionante. En este auto, la Corte declaró el cumplimiento defectuoso de la obligación del TDCA con sede en Guayaquil de determinar los intereses generados por la mora en el pago de la reparación económica y el incumplimiento de su obligación de informar. Por otra parte, determinó el cumplimiento del pago de dichos intereses por parte de la APG y de las medidas relativas a los llamados de atención. En consecuencia, al no existir medidas pendientes de ejecución, la Corte dispuso el archivo de la causa.</p> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **CN** Consulta de Norma

| CASO              | TEMA                                                                                                                                                                              | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-19-CN/26</b> | <b>Archivo por verificación de cumplimiento de medidas relativas a la regulación y aplicación del régimen disciplinario por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.</b> | <p>En fase de seguimiento, la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 3-19-CN/20, en la que determinó la constitucionalidad condicionada del artículo 109 numeral 7 del COFJ, relativo a las infracciones disciplinarias por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, y estableció parámetros para su aplicación. En este auto, la Corte determinó el cumplimiento de las medidas relativas a la emisión de normativa reglamentaria, la integración de una comisión disciplinaria permanente de la CNJ y la tramitación del proceso de origen. Asimismo, declaró que el CJ cumplió defectuosamente las medidas de difusión y capacitación, así como las respectivas obligaciones de informar. En consecuencia, al haberse verificado el cumplimiento de todas las medidas ordenadas, la Corte dispuso el archivo de la causa.</p> |

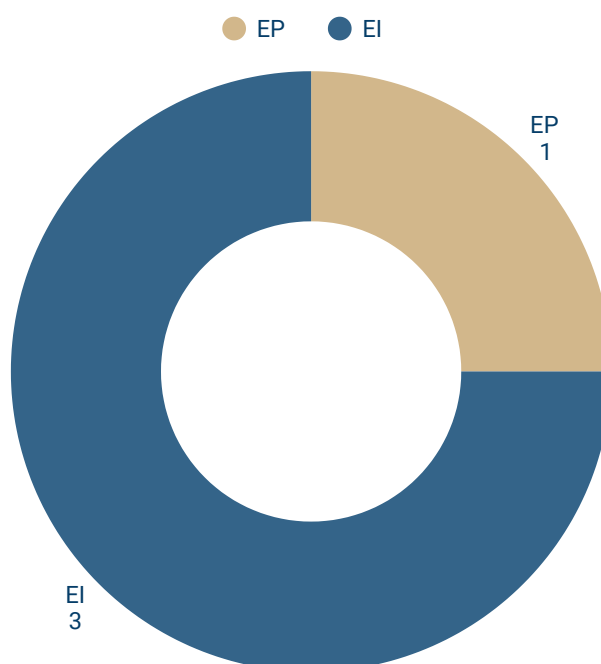
| CASO                | TEMA                                                                                                      | RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>522-20-JP/26</b> | <b>Archivo por verificación de cumplimiento de las medidas de publicación y difusión de la sentencia.</b> | <p>En fase de seguimiento, la Corte Constitucional verificó el cumplimiento de la sentencia 522-20-JP/25, en la que, al revisar una AP relacionada con la negativa del MDMQ de expropiar varios predios ubicados dentro del parque Atucucho, determinó que la garantía fue utilizada para plantear una controversia de carácter patrimonial y desestimó la acción por ser manifiestamente improcedente. En este auto, la Corte determinó que el CJ cumplió con la publicación de la sentencia, pero que la obligación de informar sobre su cumplimiento fue ejecutada de manera defectuosa. Asimismo, verificó el cumplimiento oportuno de las obligaciones de difusión e información por parte de CONGOPE y CONAGOPARE, mientras que la AME las cumplió de manera defectuosa. En consecuencia, al haberse verificado el cumplimiento de las medidas ordenadas, la Corte dispuso el archivo de la causa.</p> |

# AUDIENCIAS DE INTERÉS

Del 1 al 31 de agosto de 2026, la Corte Constitucional llevó a cabo, mediante medios telemáticos, cuatro audiencias públicas, relacionadas con acciones extraordinarias de protección y acciones extraordinarias de protección contra decisiones de la justicia indígena.

**Las audiencias correspondieron a:**

- 1 acción extraordinaria de protección (EP).
- 3 acciones extraordinarias de protección contra decisiones de la Justicia Indígena (EI).



# Audiencias públicas telemáticas

## Caso 10-23-EI

### Alí Lozada Prado

Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena presentada en contra de la decisión emitida de forma verbal el 11 de octubre de 2023 por la Asamblea General de la comunidad San Luis de Agualongo, de la parroquia San Juan de Ilumán, cantón Otavalo, provincia de Imbabura. La audiencia fue suspendida el 25 de febrero de 2026 debido a dificultades técnicas en el audio del accionante, por lo que el Pleno de la Corte Constitucional convocó a su reinstalación.



04/08/2026

## Caso 13-22-EI

### Jhoel Escudero Soliz

Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena a través de la cual se impugna la resolución emitida por la asamblea general de una confederación indígena sobre la tenencia de un niño. Se alega la presunta vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de juez competente y a la defensa, al principio del interés superior del niño, así como violencia de género.

Audiencia  
reservada sin  
transmisión

04/08/2026

## Caso 7-22-EI

### Karla Andrade Quevedo

Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena presentada por Rosa Elena Poaquiza Poaquiza en contra de la decisión emitida el 27 de julio de 2022 por la Asamblea Comunitaria Indígena de la Fundación "Runacunapac Yachana" del Pueblo Waranka, mediante la cual se resolvió un conflicto comunitario.



04/08/2026

## Caso 1814-24-EP

### Alí Lozada Prado

Acción extraordinaria de protección presentada por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, en contra de una sentencia y un auto emitidos por la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, dentro de una acción de protección.



19/08/2026

Con Independencia  
#Protegemos**Derechos**



**Quito:** José Tamayo E10-25 y Lizardo García.

**Guayaquil:** Calle Pichincha y Av. 9 de Octubre. Edif. Banco Pichincha 6to piso.

**Teléfono:** (593-2) 394-1800

**e-mail:** comunicacion@cce.gob.ec